



Edición No: 106

Febrero/2017

Sumario

- ❖ **AMÉRICA LATINA**
NO HAY PLAZAS VACANTES
Realidades y mentiras sobre el desempleo en la región
Por **ARSENIO RODRÍGUEZ**
- ❖ **¿POR QUÉ SOBREVIVE EL NEOLIBERALISMO?**
Emir Sader
- ❖ **LAS DESIGUALDADES ECONÓMICAS EN MÉXICO.**
Por Hedelberto López Blanch.
- ❖ **EL TPP, LAS TRANSNACIONALES Y TRUMP**
Por Hedelberto López Blanch
- ❖ **ECUADOR, PROGRESO SOCIAL O NEOLIBERALISMO**
Por. Hedelberto López Blanch
- ❖ **BOLIVIA**
EVO 2019, LAS BATALLAS PENDIENTES DEL PROCESO DE CAMBIO BOLIVIANO.
Por. katu arkonada
- ❖ **DE ARGENTINA:**
POLÍTICA ECONÓMICA ENTRE EL 2016 Y EL 2017
Por. Julio C. Gambina
- ❖ **EL SALVADOR. BALANCE PROVISORIO DE VEINTICINCO AÑOS DE PAZ.**
Por. Atilio A. Boron
- ❖ **LA "BATALLA DE STALINGRADO" SE LIBRARÁ EN ECUADOR.**
Por: Atilio Borón
- ❖ **CONSTANTINO EN LA ROMA AMERICANA**
Por Atilio Borón*

❖ **FUSIONES Y OLIGOPOLIOS**

En esta década el margen de fusiones y adquisiciones sobrepasa las 30 000 operaciones anuales, con un valor equivalente al 3 % de la economía mundial.

Por: Julio Martínez Molina

❖ **EL GOBIERNO TEMPORAL DE DONALD TRUMP: UNA REDOBLADA AMENAZA PARA NUESTRA AMÉRICA**

Por. Luis Suárez Salazar

❖ **TRUMP NO ESTÁ LOCO, NI ES "POPULISTA"**

Por. Olmedo Beluche

AMÉRICA LATINA NO HAY PLAZAS VACANTES

Realidades y mentiras sobre el desempleo en la región

Por **ARSENIO RODRÍGUEZ**

Ante la cercanía del fin de año viene a mi mente una imagen contemplada hace más de dos décadas en Madrid, a solo unos metros de la muy mencionada Puerta de Alcalá, donde un hombre relativamente joven, sentado en el suelo y recostado a una pared, portaba un letrero en el que reclamaba: *No pido limosnas, solo quiero que me ayuden a conseguir un empleo para poder mantener a mi familia.*



Las medidas del gobierno de Macri han aumentado el desempleo en muy breve tiempo. (foto EFE)

El llamado no podía ignorarse, aunque la multitud que paseaba por la avenida parecía no verlo, cegada quizás por las luces de neón que cubrían la calle, las vidrieras y sus anuncios lumínicos, que invitaban a los paseantes a comprar los regalos para sus seres queridos ante la llegada de la Navidad.

Ello me motiva ahora a tratar uno de los problemas que se afronta actualmente no solo en Europa, sino también en América Latina y el Caribe: el desempleo, que en ocasiones y según las estadísticas de organismos especializados, pareciera que no existe o es un mal menor.

Sin embargo, en las principales capitales de la región el fenómeno es visible. Ciudad México, Buenos Aires, Sao Paulo, en fin, no es que las personas lleven una identificación como desempleadas, pero se les puede ver haciendo colas, día tras día, en las oficinas o en las puertas de las grandes fábricas, que casi siempre los recibe con el conocido letrero de "no hay plazas vacantes".

Según informe Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe, dado a conocer en octubre por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Santiago de Chile, publicado en la edición 15 de su revista, se señala un alza del desempleo de 1.6 puntos porcentuales, en comparación con igual período del año pasado.

¿De cuántas personas estamos hablando? ¿Quiénes son los más afectados?

Una nueva generación de pobres

Las frías estadísticas no son capaces de reflejar el sufrimiento y las penurias en que viven millones de latinoamericanos y caribeños debido a la pobreza y la indigencia, fenómenos sociales que como señalara hace un año Cepal en su informe Panorama Social de la Región 2015, se incrementarían ante la ausencia de verdaderas políticas de los Estados para eliminarlos.

A mediados de junio de 2016, en Ciudad Panamá se alertaba sobre la recaída de entre 23 y 25 millones de ciudadanos con edad laboral, muchos de ellos jóvenes y mujeres, quienes tienen en la actualidad una inserción laboral precaria en los sectores de servicios y forman parte de un grupo mayor, de 220 millones de personas, es decir, un 38 por ciento de los que son vulnerables.

En fin, Latinoamérica y el Caribe será la región del mundo con el mayor incremento de la tasa de desempleo juvenil en 2016, un índice que alcanzará el 16.8 por ciento este año y llegará al 17.1 por ciento en 2017, según estima la OIT en un informe. Dicho aumento implicará un incremento extra de 800 000 desempleados jóvenes (15 a 24 años) en el área. En números absolutos, en 2015 había 8.5 millones de parados de temprana edad, una cifra que se espera que aumente hasta 9.2 millones en 2016 y 9.3 millones en 2017.

La repercusión de esta realidad se expresa de inmediato en los índices de pobreza, agravada por la desaceleración económica referida por Cepal, una situación que en 2014 afectaba al 28 por ciento de América Latina. Esta situación se traduce en más de 167 millones de personas en esa condición, lo que significa cinco millones de pobres más que en 2012.

Ahora empeora al incorporarse más personas al ejército de parados. Muchos son jóvenes recién graduados de carreras universitarias, obligados a emigrar a otras tierras en busca de empleo. Los que deciden quedarse engrosan de inmediato las estadísticas de los parados o empiezan a laborar a tiempo parcial en pequeños negocios. Quienes la pasan peor son los que, desesperados, se unen a bandas criminales y se convierten en delincuentes comunes o estafadores, de acuerdo con su nivel cultural.

Trabajar o no, esa es la cuestión

Más de la mitad de los 300 millones de trabajadores en la región son asalariados en microempresas con menos de cinco puestos de trabajo, autoempleados sin calificación. Asimismo, de las más de 50 millones de empresas pequeñas y medianas, el 70 por ciento son informales, y dos de cada tres nuevos trabajos creados en la zona fueron en el sector de servicios, que tiene baja productividad y altas tasas de informalidad. No es necesario precisar que todos aparecen en las estadísticas como personal asalariado.

El Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, añade el informe, subvalora los logros sociales y no mide aspectos importantes para el bienestar como la seguridad, la calidad del empleo, la igualdad o la conservación del medioambiente, entre otros. A lo que se debe añadir que quienes trabajan en las ya famosas microempresas, promocionadas por toda la prensa y en especial por los sectores ricos se cuentan como empleados, no importa que trabajen tiempo parcial o sencillamente una parte del año.

La situación sin embargo se agrava, sobre todo por el peso que tienen Argentina y Brasil y las políticas neoliberales que los actuales gobiernos de esas naciones llevan a cabo y que solo traen desocupación y más pobreza a la mayoría de sus respectivos pueblos.

La batería de medidas macroeconómicas de los primeros tres meses de gobierno de Macri en Argentina, por ejemplo, redundaron en que 1.4 millones de personas cayeran por debajo de la línea de pobreza. Por su parte, el presidente interino de Brasil, que llegó al cargo mediante un golpe, ya presentó sus cartas credenciales con despidos de miles de trabajadores.

La publicación en abril del informe del Observatorio de Deuda Social de la UCA –la casa de estudios donde se formaron Macri y varios miembros del gabinete– puso en cifras las consecuencias del ajuste, y obligó al Gobierno a dar explicaciones. La consigna “nuestro objetivo es pobreza cero en la Argentina” repetida por el Presidente durante la campaña, no solo no se cumplía, sino que los pobres se multiplicaban. “Pobreza cero tiene que ver con una meta como sociedad. Es una meta desde ya inalcanzable”, se excusó recientemente el jefe de Gabinete, Marcos Peña, durante un brindis con periodistas en la Casa Rosada.

Viajando mentalmente sobre el Atlántico para llegar a España, uno se pregunta al aterrizar si aquel buen señor que no pedía limosnas, sino ayuda para lograr un trabajo, pudo o no encontrar uno digno, aunque mejor sería indagar si sus nietos forman parte de los cientos y cientos de

españoles que, en busca de trabajo, se desplazan a otras naciones europeas, especialmente a Alemania.

¿POR QUÉ SOBREVIVE EL NEOLIBERALISMO?

[Emir Sader](#) - 08/02/2017



En su surgimiento el modelo neoliberal traía promesas atrayentes. Antes de todo, contener los gastos excesivos del Estado, diagnosticado con la fuente de la inflación. Por otra parte, imponer a la economía el dinamismo centrado en las empresas privadas y en el mercado. Por el discurso liberal que lo acompañaba, se fortalecería la sociedad civil y la ciudadanía, libres de las trabas y de la opresión del Estado.

No fue lo que pasó pero, por lo menos, en algunos casos, y por algún tiempo, hubo control de la inflación, aunque multiplicando la deuda pública. Cuando sus efectos positivos se habían agotado, vino el discurso de que, si era el mejor modelo, era el único posible en la era de la globalización.

Hoy, cuando la crisis recesiva se perpetúa en Europa, ya desde 2008, mientras que ese efecto se extiende por toda la economía internacional, ya no se ven rasgos positivos y tampoco, es obligatorio mantener el modelo neoliberal, eje de la crisis a nivel nacional e internacional. Los partidos tradicionales, conservadores y socialdemócratas, que han asumido la política de austeridad –la forma que asume el neoliberalismo en ese continente – se ven castigados por los electores y cada elección se vuelve una desesperación para esos partidos.

En ningún lado la aplicación de los duros ajustes fiscales –eje de los modelos neoliberales– cumplió con sus promesas. Ni control de las cuentas públicas y de la inflación, menos todavía retomar el desarrollo económico. Su desempeño es globalmente considerado un fracaso, responsable por la perpetuación de la recesión en la economía mundial.

En América Latina ello es igualmente evidente. Compárese las economías de Argentina y de Brasil en los gobiernos anti neoliberales y en el retorno del modelo neoliberal, y el resultado es escandalosamente claro a favor de los primeros. Mírese todo lo que han mejorado países como Ecuador, Bolivia, Brasil, en comparación con la situación de México, de Perú.

Pero, ¿por qué, a pesar del espectacular fracaso del neoliberalismo, ese modelo sigue vigente en gran parte del mundo, incluyendo EEUU, Europa, Japón, la mayoría de los países de América Latina, de Asia y de África?

En primer lugar, porque ese modelo refleja los intereses del capital financiero, que es el hegemónico a nivel económico, en el estadio actual del proceso de acumulación del capital. Hay fuertes intereses económicos en la preservación de ese modelo, que solo incrementa la riqueza y el poder del capital financiero.

En segundo lugar, porque el propio capitalismo no posee alternativas. Llegado a su etapa actual, no lograría retornar a formas de regulación económica, que le permitirán no estar sometido a las presiones recesivas del capital financiero.

En tercer lugar, porque las fuerzas que se oponen al neoliberalismo no han logrado, hasta ahora, en la gran mayoría de los países, comprender que la lucha fundamental en el período histórico actual es por la superación del modelo neoliberal y lograr así construir una alternativa concreta a ese modelo, congregando a las fuerzas sociales y políticas necesarias.

Después de su surgimiento con fuerza, el modelo neoliberal pasó a su fase de sobrevivencia, una fase marcada por la recesión económica y por una gigantesca crisis social, así como por una inmensa crisis hegemónica que apunta hacia su agotamiento y la búsqueda de alternativas de su superación.

- **Emir Sader**, sociólogo y científico político brasileño, es coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro (UERJ).

LAS DESIGUALDADES ECONÓMICAS EN MÉXICO.

Por Hedelberto López Blanch

Contrariamente a lo que algunos especialistas auguraban para el año 2106, la economía mexicana no ha crecido lo esperado, solo 2,5 % del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que la pobreza y la desigualdad tomaron nuevos impulsos.

El año 2017 se ha iniciado con mayores incertidumbres para los pobladores pues se decretó un denominado tarifazo en el combustible que eleva el precio de la gasolina entre 14 y 20 %. Ante esa medida, aumentará el valor de todos los productos, tanto del agro como de la industria lo cual será catastrófico para la gran mayoría pobre de la población.

Al analizar los datos, no solo se puede medir el PIB de la nación, sino lo que ha significado abrir al capital privado todos los sectores productivos y de servicio, como lo exige el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El TLCAN acordado en 1994 entre México, Estados Unidos y Canadá, lejos de beneficiar al país azteca, le ha llevado a ser aun más dependiente económica y políticamente del gigante del norte.

Si en el año que entró en vigor el acuerdo, México según el Fondo Monetario Internacional (FMI), aparecía en el noveno lugar entre las naciones con mayor Producto Interno Bruto, hoy ese país se encuentra en el 15, después de sobrepasarlo Rusia, India, España, Australia y Corea del Sur.

Una de las pocas empresas estatales que aún quedan en el país es Petróleos Mexicanos (PEMEX) pues las compañías transnacionales con sede en diferentes países y en especial de Estados Unidos, se han adueñado de la economía, y en la práctica dirigen comercio, producción y servicio, a la par que extraen los beneficios obtenidos de la nación azteca.

Varios acápite del Tratado impiden a los mexicanos acudir a tribunales nacionales cuando se presenten diferencias, mientras en los internacionales las disputas son inapelables, las audiencias casi siempre son secretas y Estados Unidos puede ser demandado pero sin reclamos a los inversionistas. Además, cualquier gobierno que llegue al poder esta invalidado de promulgar leyes que atenten contra los intereses de esas compañías, so pena de tener que acudir a los tribunales.

Un reciente estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) informó que el 54 % de los habitantes, unos 60 millones de personas, viven en situación de pobreza y el 10 % (unos 12 millones) en pobreza extrema.

El 48 % de las escuelas públicas carecen de acceso a drenaje, 31 % no tienen al agua potable, 12.8 % no cuenta con baños sanitarios y 11.2 % no poseen energía eléctrica. A lo que se suma que debido a la necesidad de ayudar económicamente a sus familiares, los niños trabajan a edades tempranas y no concurren a las aulas.

Las políticas neoliberales se hicieron más fuertes tras aprobar en diciembre de 1992 el expresidente Carlos Salinas de Gortari el TLCAN, (entró en vigor en enero de 1994) y consecuentemente el hambre y la pobreza se convirtieron en males mayores de los aztecas, unido a la enorme violencia de los carteles de la droga que envían los estupefacientes hacia el país más consumidor del mundo: el vecino Estados Unidos.

Con el TLCAN se provocó que millones de campesinos, junto a sus familiares, abandonaran las tierras al no poder competir con la inundación de productos agrícolas y alimenticios provenientes de Canadá y Estados Unidos.

Los campesinos emigran en masa hacia las grandes ciudades donde les resulta sumamente difícil hallar trabajo y pasan a engrosar las filas de los vagabundos, o los más jóvenes tratan de cruzar las custodiadas fronteras norteamericanas en un vía crucis de inmigrantes clandestinos.

Con el gobierno actual, la situación ha empeorado ya que entre el 2012 y 2015, la pobreza abrazó a otros 2 millones de mexicanos.

En enero de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto firmó la ley de reforma energética que abrió a las empresas extranjeras las grandes reservas petroleras del país con lo cual se cierra el cerco de privatizaciones y neoliberalismo iniciado con el TLCAN.

De esa forma, se eliminó el artículo 27 de la Constitución aprobado desde 1938 por el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas que establece: "tratándose del petróleo... o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos".

Innegablemente que la decisión tomada por el actual Senado azteca, ha sido otro fuerte golpe a la soberanía e independencia de la nación.

Nuevamente con el denominado tarifazo, la situación económica de los mexicanos se deteriora aún más al elevarse todos los precios de la canasta básica, el transporte y los insumos.

Otro denigrante dato aportado por la Organización No Gubernamental Oxfam denuncia que el 1 % de la población concentra el 21 % de los ingresos totales del país, o sea, más de 3.4 billones de pesos (3.4 millones de millones).

Agrega la Organización que la suma de las fortunas de los cuatro mexicanos más ricos; Carlos Slim (77 000 millones de dólares), Alberto Bailleres (10 400 millones de dólares); Germán Larrea (13 900 millones de dólares) y Ricardo Salinas Pliego (8 000 millones de dólares), ascendió al 10,5 % del PIB en el 2015, mientras que en el 2002, representaban solo el 2 % del PIB. En ese tiempo han aumentado su patrimonio en 480 %.

Con inequidades, pobreza y desaliento se fue el año 2016, y al parecer, el 2017 no traerá mejoras económicas para decenas de millones de mexicanos.

Tomado de REBELIÓN/6 de enero del 2017

*Periodista cubano, escribe para el diario *Juventud Rebelde* y el semanario *Opciones*. Es investigador de la emigración cubana.

EL TPP, LAS TRANSNACIONALES Y TRUMP

Por Hedelberto López Blanch

La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump de excluir a su país del Tratado Transpacífico (TPP) no ha tomado por sorpresa a los otros 11 miembros, pero sí ha creado muchas interrogantes sobre cómo responderán las grandes compañías transnacionales que aspiraban a controlar una parte importante del mercado mundial.

Trump cumplió su promesa pre electoral al firmar el decreto sobre el TPP, Tratado que ya había sido suscrito, en febrero de 2016 por los 12 países que lo integran (Estados Unidos, Japón, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, Nueva Zelanda, México, Perú, Singapur y Vietnam) pero no ratificado aún por algunos de los esos Parlamentos.

En total abarca el 40 % de la economía mundial, el 30 % de las exportaciones globales, el 25 % de las importaciones, y reúne a 800 millones de consumidores.

El multimillonario pacto, conveniado en forma secreta desde 2006, beneficia a las grandes compañías transnacionales y a Estados Unidos pues la primera condición es que pondría fin a los aranceles de 18 000 productos norteamericanos, entre estos, automóviles, maquinaria, cigarrillos, tecnología de la información, productos de consumo, el acceso a internet, la protección a los inversionistas, la propiedad intelectual, los farmacéuticos y la producción digital.

La gravedad de ese mega acuerdo consiste, además, en que las transnacionales obtendrían amplios poderes para desafiar las regulaciones, acciones y decisiones de gobiernos soberanos ante tribunales organizados por mecanismos internacionales controlados por el gran capital. Sus integrantes deben aceptar las reglas establecidas pese a que éstas atenten contra la soberanía nacional.

De esa forma, las corporaciones monopólicas pueden demandar a los gobiernos y solicitar millonarias indemnizaciones si estos no obedecen las prerrogativas obtenidas en los convenios.

Entre las poderosas compañías transnacionales que han laborado en la confección del acuerdo, aparecen Chevron (petrolera), Monsanto (afroindustrial) y Barrick Gold (minera), informó la organización empresarial Council of the Americas-Americas Society, con sede en Nueva York.

El ex presidente Barack Obama durante su mandato hizo todo lo posible por llevar a vías de hecho el Tratado pero sus acciones fueron bloqueadas en la Cámara de Representantes por miembros del Partido Republicano.

Obama, quien estaba decidido a detener el empuje económico alcanzado en los últimos años por China y Rusia, declaró en uno de sus discursos que "con más del 95 % de nuestros clientes potenciales viviendo fuera de nuestras fronteras, no podemos dejar que países como China escriban las reglas de la economía global"

Ahora Trump ha dado un giro de 90 grados hacia el proteccionismo económico y dejó claro que su gobierno no participará en los próximos cuatro años en acuerdos de libre comercio, ya sean el TPP, el Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP) que se negociaba entre Estados Unidos y la Unión Europea, o el Tratado de Libre Comercio de América (TLCAN) el cual pretende revisar con México y Canadá.

Algunos gobiernos han declarado que de todas formas buscarán ratificar el TPP, aunque comprendan que no sería lo mismo que con la participación de la mayor economía mundial. Otros analistas aseguran que el beneficio mayor recaerá en China que continuará incrementando su influencia no solo en la región asiática sino también en América Latina.

Pero la pregunta clave es ¿qué harán las compañías transnacionales que después de tantos años de participar en las discusiones secretas en las cuales obtuvieron numerosas prebendas, ahora que de un solo plumazo vean "volar" jugosos y millonarios convenios?

Hasta el año 2013, el principal negociador de Estados Unidos dentro el TPP sobre temas agrícolas fue Islam Siddiqui, ex cabildero de Monsanto. Siddiqui dejó esas funciones tras asegurar plenamente la imposición de futuras leyes a favor de las transnacionales.

Otra enorme prebenda obtenida por este negociador obliga a los países a acatar la propiedad intelectual de las semillas que fue promovida por Monsanto en 1991, o sea, las naciones y los campesinos solo podrán utilizar semillas de esa multinacional.

Al salir Estados Unidos del TPP, esas compañías dejarían de explotar la flora y la fauna de varios países sin tener que rendir cuentas por desastres provocados por la aplicación de dañinos pesticidas o por descontroladas explotaciones petroleras como el caso de la ex compañía Texaco (adquirida después por Chevron) que afectó miles de hectáreas en la Amazonía Ecuatoriana.

Ese Tratado también beneficia a las grandes farmacéuticas porque impide que los laboratorios de genéricos tengan el permiso para vender medicamentos para el VIH, cáncer y vacunas que sean más baratos y con la misma calidad. De esa forma, solo si cuentan con bastante dinero podrán adquirir medicamentos para mejorar o salvar sus vidas.

En México, uno de los países firmantes del pacto, el 84% de los medicamentos que se venden son genéricos.

Toda esa realidad augura que se abrirán nuevos frentes de lucha económica y política entre la Casa Blanca y las transnacionales.

Mientras tanto, si los demás integrantes insisten en continuar adelante con el TPP sin Estados Unidos, e invitar en su lugar a China, deberán realizar una revisión completa del texto, hacerlo público y eliminar las enormes prebendas que se les otorgan a las transnacionales en contra de sus pueblos.

ECUADOR, PROGRESO SOCIAL O NEOLIBERALISMO

Por. Hedelberto López Blanch

Pese a la enorme ofensiva política, económica y propagandística llevada a cabo por las fuerzas de derecha contra los gobiernos progresistas surgidos en la Latinoamérica, hasta ahora el único derrotado en las urnas fue el justicialismo argentino.

Los gobiernos nacionalistas de Nicaragua, Bolivia, Venezuela, Ecuador, El Salvador, Uruguay han sabido cerrar filas para que no regresen las ahogantes leyes neoliberales que sufrieron sus pueblos durante décadas.

Al no lograr alcanzar el poder mediante elecciones, la derecha criolla, con apoyo de potencias occidentales, se ha lanzado a tomarlo por otras vías como los golpes parlamentarios realizados en Brasil, Paraguay y Honduras.

Ahora le toca nuevamente a Ecuador medir fuerzas en los venideros comicios presidenciales del 19 de febrero y Alianza País lo hará con un extenso aval de progreso económico y social realizado en los últimos diez años a favor del pueblo.

Desde que en enero de 2007 el presidente Rafael Correa llegó al poder, ganó sucesivamente en 10 distintos procesos electorales, y ahora ha decidido pasarle la batuta a la fórmula, Lenin Moreno-Jorge Glas, del Partido Alianza País.

Ciertamente que en esas elecciones está en juego la continuación de las políticas económicas y sociales que ha llevado adelante la administración de Correa con la puesta en marcha de la Revolución ciudadana en beneficio de las grandes mayorías, o por el contrario, el regreso a las fórmulas neoliberales que hundieron a esa nación en un verdadero caos político-económico que dieron al traste con tres ex mandatarios (Abdala Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez) los cuales traicionaron el apoyo que les dispensó el pueblo al impulsar agresivas políticas neoliberales.

En ese período aumentaron la pobreza de los habitantes y la entrega de las riquezas del país al capital extranjero, fue sustituido el sucre como moneda nacional por el dólar, y todo eso ocurrió bajo la orientación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).

Recientemente Correa detalló en una comparecencia pública que en el período de 10 años "se invirtieron 85 000 millones de dólares en educación, defensa, salud y hasta en servicios para emigrantes; salieron de la pobreza a 2 000 000 de ecuatorianos; los trabajadores duplicaron sus salarios y los empresarios triplicaron sus ganancias; los campos y ciudades mejoraron sensiblemente y el desarrollo social ha sido impresionante".

Enfatizó que la Revolución Ciudadana llevó a cabo en el país "un cambio radical, profundo y rápido del sistema político, económico y social vigente hasta 2007, sistema perverso que destruyó nuestra democracia, nuestra economía y nuestra sociedad".

Veamos en apretada síntesis cuáles han sido los resultados alcanzados por la Alianza País con la Revolución Ciudadana.

A partir de 2007, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) fue de 4,5 % de promedio anual, y los aportes a la inversión pública alcanzaron 25 % lo cual sirvió para combatir la desigualdad y reducir los índices de pobreza mediante políticas económica-sociales realistas y dinámicas.

Ese por ciento cayó en el presente año debido a la baja en los precios del petróleo, principal producto de exportación y entrada de divisas de la nación, además de grandes pérdidas materiales y humanas por los fuertes terremotos que afectaron al país.

Pese a esos inconvenientes, la Revolución Ciudadana ha continuado superando la historia de exclusión e injusticias arraigadas en Ecuador a lo largo de décadas.

Un paso fundamental para alcanzar logros sociales superiores fue la recuperación y fortalecimiento de la soberanía sobre los recursos de la nación y en específico la rama petrolera, lo cual permitió que el Producto Interno Bruto (PIB) de la nación andina pasara de 46 000 millones de dólares en 2007 a 110 000 millones de dólares en 2016.

El crecimiento económico unido a una destacada política social facilitó al gobierno construir decenas de escuelas, hospitales, miles de kilómetros de modernas carreteras e hidroeléctricas.

En 2016, las familias ecuatorianas pudieron cubrir un 94 % de la canasta básica con sus ingresos, mientras que antes solo llegaba al 60 % de cobertura. Con una inversión en la salud pública de más del 700 %, y en educación del 400 %, se impulsó la gratuidad de esos importantes sectores en todos los pueblos y ciudades; creció la asistencia a los ancianos y el apoyo a madres solteras cabezas de familias, mediante el Bono de Desarrollo Humano otorgado a cerca de 2 000 000 de beneficiarios.

El desempleo se ubicó en 4,5 %, una de las más bajas del continente, la pobreza se ha reducido a 7 % a la par que el sector no petrolero creció un 9 %.

El bono de 50 dólares mensuales facilita que las madres envíen a sus hijos a las escuelas (donde reciben además alimentación) con la consecuente disminución del trabajo infantil al no tener que participar ellos en ayudar al sustento familiar.

Bajo esa fórmula se ha eliminado casi por completo el trabajo infantil, al sacar de esa esfera a cerca de 550 000 niños y niñas. La desnutrición en menores bajó a alrededor del 9 %. Así las cosas, el Partido Alianza País cuenta para las venideras elecciones con un importante aval político, económico y social en beneficio del pueblo, cuyos habitantes serán los encargados de decidir en las urnas si darán el apoyo a la candidatura Lenin Moreno-Jorge Glas o se inclinarán por volver a las oscuras noches neoliberales.

BOLIVIA

EVO 2019, LAS BATALLAS PENDIENTES DEL PROCESO DE CAMBIO BOLIVIANO.

Por. KATU ARKONADA



La decisión está tomada. Evo Morales será el candidato del MAS y de los sectores populares en las elecciones presidenciales que tendrán lugar el último trimestre de 2019.

Para ello, el proceso de cambio tendrá que librar importantes batallas durante los dos años que faltan hasta que comience una campaña electoral que se adivina la más dura y despiadada de cuantas han acontecido en Bolivia, incluida la que tuvo lugar para el referéndum del 21 de febrero de 2016.

La batalla del liderazgo

La repostulación de Evo (sea vía recolección de firmas para un nuevo referéndum o vía habilitación por renuncia como recientemente ha teorizado [\[1\]](#) Héctor Arce, Procurador General del Estado) traerá un costo político necesario de asumir, pero costo al fin y al cabo, entre los sectores de clase media urbana que no apoyan a la oposición, pero sí manifiestan una posición muy crítica del gobierno nacional (que se ha manifestado en el apoyo al No en el referéndum, en el señalamiento al gobierno como responsable de la

crisis del agua, o en su posicionamiento en contra de eventos como el Dakar). Esta oposición podría canalizarse mediante la postulación presidencial de Carlos Mesa, ex Vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Losada y ex Presidente entre octubre de 2003 y junio de 2005, de quien la frágil memoria de esas clases medias parece haber olvidado lo nefasto político que fue.

La batalla de la juventud

Junto a las clases medias, otra batalla a librar por el proceso de cambio boliviano es la de la juventud. Una amplia masa de votantes que en 2019 no habrá conocido el neoliberalismo. El MAS y el proceso en general tiene el deber de construir un proyecto que no interpele solo la mística posneoliberal, si no que atraiga a los sectores más jóvenes de este país, y un arma fundamental para disputar esta batalla es la cultura. No hay proceso, ni mucho menos revolución, que no venga acompañada de una política cultural. Construir revolución en el cine, teatro, música, es una tarea pendiente del proceso de cambio.

La batalla del sentido común

Y si hablamos de mística y cultura, el proceso necesita construir un nuevo sentido común de época, una nueva hegemonía que necesariamente tiene que ser posneoliberal y partir de interpelar al núcleo duro del proceso de cambio, yendo más allá, volviendo a incorporar sectores que se han ido alejando. Esta afirmación no pasa necesariamente por volver la mirada hacia las clases medias. Todo lo contrario, el núcleo y principal destinatario de las políticas públicas del proceso debe ser la mayoría social del país, el movimiento indígena originario campesino. La lección del referéndum del 21 de febrero, donde se bajaron algunas banderas (literalmente, se sustituyó el azul y negro del MAS por un naranja y verde) para no "asustar" a la clase media, debe servir para tener un horizonte claro. Solo a partir de ese núcleo duro es que se puede irradiar hacia otros sectores; empresariales, estudiantiles, etc.

La batalla de la gestión

Otra de las lecciones del referéndum por la repostulación de Evo Morales es que ya no es suficiente con hacer una buena gestión para contar con un amplio apoyo electoral. La buena gestión, que no es fruto de casualidades si no la causalidad de una serie de decisiones políticas, se da ya entre la población como un hecho y el listón está tan alto que cuando no se alcanza, se sufre el castigo electoral. Es por ello que en la fase que viene del proceso de cambio, la profundización y a ser posible radicalización del proceso se tiene que dar manteniendo desde las instituciones del Estado una gestión impecable.

La batalla económica

De manera complementaria a la gestión, es necesario continuar con el proceso de redistribución de la riqueza iniciado en 2006, pero con un salto hacia adelante que es el de la industrialización. La crisis económica que ha contraído una buena parte de las economías latinoamericanas no ha repercutido tanto en Bolivia gracias a las buenas decisiones tomadas, pero el crecimiento cercano al 5% (el más alto de Sudamérica) que se prevé para 2017 debe ser también la base sobre la que lanzar una ofensiva en favor de los sectores populares. Entre los pendientes, una reforma fiscal que impulse la progresividad.

La batalla mediática

Una de las batallas más importantes a enfrentar en los próximos 3 años es la mediática. La agresión mediática perpetrada en el referéndum del 21 de febrero apuntaba a erosionar el pilar sobre el que gravita el proceso de cambio, la figura y el liderazgo de Evo Morales. Es más que previsible que la confrontación mediática, amparada en mentiras y difamaciones en muchos casos por parte de los medios privados bolivianos, se intensifique en la medida en que nos vayamos acercando a 2019. Es en este terreno donde la derecha, nacional e internacional, con la ayuda del imperialismo estadounidense, lleva años de ventaja a las fuerzas populares. Es urgente construir trincheras mediáticas de la verdad frente a la ofensiva de la mentira, tanto desde los medios estatales como desde los medios comunitarios.

La batalla ética

La ofensiva mediática que vive no solo el proceso boliviano sino todos los procesos de cambio latinoamericanos y caribeños, pasa por la construcción de matrices mediáticas contra los principales liderazgos y logros de estos procesos. La principal matriz, probada en Argentina y Brasil especialmente, es la acusación de corrupción contra unos gobiernos mucho más transparentes que los del neoliberalismo. No hay más que ver cómo viven las y los ex ministros de Evo, y como viven los del neoliberalismo. Una forma de pasar a la contraofensiva es estableciendo una línea de defensa infranqueable de intolerancia absoluta contra cualquier forma de corrupción, dejando al enemigo sin un solo argumento que justifique la construcción de estas matrices.

La batalla territorial

Si bien serán importantes las batallas anteriores, la batalla final se dará sobre el territorio. Y en ese campo solo nos queda volver a Lenin. La tarea principal del proceso de cambio será el trabajo territorial con la gente, la formación política de una sociedad que se va despolitizando y a la que van despolitizando. Y para esta batalla se necesita reforzar el instrumento político, el MAS-IPSP que debe dar una vuelta de tuerca y pasar de ser una maquinaria electoral a una máquina de guerra electoral asentada sobre dos pilares fundamentales, el territorio y la gente, el pueblo.

DE ARGENTINA:

POLÍTICA ECONÓMICA ENTRE EL 2016 Y EL 2017

Por. Julio C. Gambina
Tomado de: REBELIÓN

Alfonso Prat Gay dijo en su momento, en una conferencia en EEUU, que el "trabajo sucio" ya estaba hecho. Se refería a las iniciales medidas económicas del gobierno Macri: la devaluación, el levantamiento a las restricciones cambiarias (Cepo), la eliminación o reducción de retenciones a las exportaciones, el arreglo con los acreedores en conflicto con más deuda y el ajuste de tarifas de servicios públicos.

Cuando se despedía, no dudó en hablar de "éxito" de su gestión, pese a la recesión y la inflación, coronado con un anuncio de 90 mil millones de dólares exteriorizados por el blanqueo, que podría llegar a 120 mil millones de dólares hacia fines de marzo cuando se exterioricen los inmuebles no declarados. Hay que pensar en un 10% de la exteriorización como potencial recaudación por multas.

De su propia boca escuchamos al Ministro saliente aludir al trabajo sucio y al éxito de la gestión, toda una confesión, que explicita beneficiarios y perjudicados.

Entre los primeros los grandes productores y exportadores, la gran banca y los especuladores, entre ellos los acreedores externos y nuevos prestamistas de la Argentina, y en general el gran capital hegemónico, pese a la recesión y la inflación. Claro, en materia de precios, son los sectores más concentrados los que explican la escalada de precios. No cualquiera puede incrementar los precios, y si no, veamos cuanto les cuesta a los trabajadores ajustar sus ingresos, ni hablar de los jubilados y los perceptores de planes sociales.

Los perjudicados son la mayoría de la sociedad, la gran masa de trabajadoras y trabajadores y el grueso de los pequeños y medianos productores y empresarios, en general, todos asociados a la capacidad de compra y venta en el mercado interno. Todos los datos de la economía muestran reducción de ventas y producción, por baja de consumo y capacidad adquisitiva de la mayoría de la población.

NUEVOS MINISTROS

Nicolás Dujovne se hará cargo del Ministerio de Hacienda desde el 2017.

Ya anunció en conferencia de prensa sus objetivos concentrados en: a) bajar el déficit, b) aumentar el gasto en infraestructura, c) reducir impuestos, distorsivos dice, y d) comunicar buenas noticias a la sociedad.

El primer objetivo es contradictorio con el segundo, por lo que se supone el nivel de ajuste del gasto social será importante. Dice que no ajustará pero que estudiará a fondo todos los gastos, siempre para reducirlos, no para aumentarlos.

La línea del ajuste queda clara, mientras que los constructores se preparan para intervenir en las licitaciones de obra pública que estuvo frenada durante el 2016 para intentar frenar el déficit fiscal.

El esfuerzo por incrementar obra pública contrasta con la segura reducción del gasto social. Una muestra es el reciente conflicto en el Conicet o en el Ministerio de Educación.

La reforma tributaria suena a beneficios para los empleadores, una pista que surge del calificativo "distorsivo" para los tributos. Lo que se quiere con ese lenguaje es reducir el costo de contratación a los inversores, para mejorar la perspectiva de rentabilidad al capital.

Ni por asomo se piensa en reducir la alícuota del IVA, principal fuente de recaudación tributaria en la Argentina, un 8% del PBI, contra el 6% del impuesto a las ganancias, de los cuales, más del 2% recae en los pagos de la cuarta categoría que abonan unos 2 millones de trabajadoras/es.

Sobre la comunicación a la sociedad, la especulación se asocia a la trayectoria de comunicador liberal del columnista de *La Nación* y *TN*.

Convengamos que una cosa es comunicar como analista, de derecha o de izquierda, y otra muy distinta seguir explicando el ajuste y la regresiva reestructuración de la economía argentina en la gestión Macri.

Otra novedad es que el Ministerio se dividió en Hacienda y en Finanzas. En este último caso se ascendió a Luis Caputo de Secretario a Ministro. ¿El mérito? Haber tenido éxito en endeudar al país y hacerlo regresar al mercado de préstamos mundial, algo que se profundizará desde el mismo enero del 2017.

La nueva deuda estimada entre el 2016 y el 2017 será de 90 mil millones de dólares, una fuerte hipoteca para el conjunto de la sociedad argentina, la que se comunicará como un éxito, ya que supone que el país vuelve a ser sujeto de préstamos del sistema financiero mundial.

Para fundamentar el cambio de Ministros, Macri y sus funcionarios de la Jefatura de Gabinete apuntaron a mejorar el equipo, nunca a promover cambios en la política económica para beneficio social.

Realizado el trabajo sucio, se busca profundizar el ajuste y la regresiva reestructuración a favor de la ganancia.

Claro que para ello tienen que disciplinar al conflicto social. Para eso tienen al Ministro del Interior y al de Trabajo que "dialogan" y pactan con la burocracia política y la sindical respectivamente.

Saben de la tradición combativa del pueblo argentino y por eso se empeñan en controlar el conflicto y si pueden, contenerlo en la fragmentación que hace visible la protesta en la actualidad.

NUEVA SITUACIÓN MUNDIAL

El marco internacional continua desfavorable para la aspiración de atraer inversores. La situación mundial privilegia la orientación de capitales hacia los países capitalistas desarrollados, especialmente EEUU.

Luego del 20 de enero, con Donald Trump en Washington y su política de recuperación de la economía estadounidense, lo previsible será que la potencia imperialista actúe como una aspiradora de fondos de inversión de todo el mundo.

Sin contar, claro, que el mapa de la geopolítica cambiará en nuevas disputas entre los principales países del sistema mundial. Además de EEUU, habrá que contar a Europa, China y Rusia que no solo disputan destino de inversores, sino condiciones de beneficio de sus políticas nacionales.

El papel de Argentina es subordinado en esta ecuación global, y a no dudar, el destino seguirá profundizando la dependencia del capitalismo local en el sistema mundial.

EL SALVADOR. BALANCE PROVISORIO DE VEINTICINCO AÑOS DE PAZ.

Por. Atilio A. Boron

El Salvador conmemora en estos días más de dos décadas de la firma de la paz: una gesta que todavía provoca esperanza en su pueblo y en las naciones del mundo que aún enfrentan conflictos armados. Sí, es cierto: la guerra se acabó. El Acuerdo de Chapultepec calló las armas e hizo posible la difícil, casi traumática, convivencia de dos proyectos políticos y dos visiones del mundo radicalmente distintas, pero la guerra continúa.

La paz se firmó hace ya 25 años, pero en las negociaciones entre el gobierno y la guerrilla del FMLN hubo algo que permaneció al margen de toda discusión: el modelo económico fue el gran ausente en esas conversaciones. La correlación interna e internacional de fuerzas impidió que el FMLN pudiera instalar el tema en la agenda. Es decir que lo que creó –y crea– las condiciones para el conflicto y eventualmente la guerra, y lo que genera la injusticia y la opresión que la provoca, no estuvo presente en la mesa de negociaciones. Se firmó la paz sobre un trasfondo de conflicto que fue ignorado. Tal cosa, afortunadamente, no ocurrió en las conversaciones que tuvieron lugar en La Habana entre las FARC-EP y el gobierno colombiano.

Para colmo de males, hace poco más de diez años, El Salvador firmó su adhesión al Tratado Centroamericano de Libre Comercio (CAFTA, por su sigla en inglés) promovido por Estados Unidos. Lo hizo junto a los otros países de América Central (Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Guatemala) y la República Dominicana. Si su predecesor, el NAFTA firmado entre Estados

Unidos, Canadá y México tuvo consecuencias económicas, políticas y sociales catastróficas en el país azteca, los resultados del CAFTA difícilmente podían ser mejores en el área centroamericana. Y no lo fueron. Un ejemplo: en El Salvador, en los diez años anteriores a la firma del acuerdo comercial las exportaciones crecían a un ritmo del 8 por ciento anual; luego de la entrada en vigor del tratado lo hicieron a casi la mitad. Claro que las importaciones procedentes de Estados Unidos aumentaron vertiginosamente precipitando una fuerte expansión del consumo en los estratos superiores de las capas medias (pero no en el resto de las clases populares) y desatando, como contrapartida, la misma debacle campesina que antes se produjera en México y que convirtiera a la tierra originaria del maíz en importador neto del transgénico norteamericano. A diez años de haberse puesto en vigor aquel tratado la principal vía de escape a la pobreza en El Salvador -que en el campo se empina alrededor del 60 por ciento de la población siendo un 40 por ciento para el total del país- sigue siendo la emigración. No hay prueba más contundente del fracaso del CAFTA que esa. Pero si bien es relativamente sencillo en el marco del tratado exportar mercancías a Estados Unidos (siendo muchísimo más fácil importarlas desde ese allí), los salvadoreños tienen que arriesgar sus vidas para ingresar al país que los invitara a compartir las mieles del "libre cambio". Circulan sin restricciones las mercancías, no las personas. En la actualidad unos dos millones y medio de salvadoreños viven en Estados Unidos. Sin contar los que se encuentran en otros países (España, principalmente) se trata de una cifra que representa poco más del 40 por ciento de la población del país, estimada en unos 6.100.000 habitantes. La expulsión de esa masa migrante origina ingresos, por la vía de las remesas, del orden de los 4.200 millones de dólares, permitiendo que un millón trescientas mil personas puedan sobrevivir en el país a los rigores e inequidades de la globalización neoliberal. Téngase en cuenta que según datos oficiales el 87 por ciento de las personas en edad de jubilarse no cuenta con ningún tipo de pensión o ayuda previsional. Esas remesas son esenciales para su supervivencia y representan el segundo ítem de ingreso de divisas, sólo superado por las exportaciones salvadoreñas.

Todo lo anterior habla con elocuencia de la fragilidad del país y de la estafa de los tratados de libre comercio. En noviembre del año 2000, el corrupto presidente Francisco Flores, de la muy derechista ARENA -el partido que cuenta entre sus fundadores al asesino de Monseñor Oscar Arnulfo Romero- promulgó la Ley de Integración Monetaria por la cual El Salvador adoptó el dólar y abandonaba definitivamente el colón, que había sido la moneda oficial desde 1892. Como consecuencia de ello el gobierno perdió un instrumento decisivo de manejo macroeconómico: la política monetaria. Esta circunstancia, unida a la importancia de las remesas procedentes de los salvadoreños en el exterior y los perniciosos efectos del CAFTA refuerzan la dependencia estructural de El Salvador en relación con Estados Unidos y coloca al gobierno en una situación de debilidad que no pudo ser superada por el FMLN. Con el dólar, las remesas y el CAFTA Washington maneja los resortes fundamentales de la economía del país centroamericano. Agréguese a lo anterior la importancia de El Salvador por su ubicación en el istmo centroamericano, lo que suscita la permanente atención del Pentágono dado que esa parte del mundo es vista por sus estrategias como una fuente de innumerables acechanzas y, por eso mismo, territorio preferencial (junto con el Caribe) para la instalación de un gran número de bases militares que, según algunos expertos, serían más de cincuenta.

Dados estos antecedentes, lo que ha hecho el gobierno del FMLN es mucho, pero se trata de una tarea titánica por todo lo que todavía es preciso hacer. Democratizó el proceso político y el acceso al gobierno. Pero las estructuras de los "poderes fácticos" permanecen inalteradas, el Poder Judicial enfrenta con saña las iniciativas del presidente Salvador Sánchez Cerén y otro tanto ocurre con el Congreso y la feroz oligarquía mediática. En suma: conquistas democráticas en un ámbito acotado de la vida pública y permanencia del despotismo oligárquico en todo lo demás. El Salvador es un país que a lo largo de su historia fue víctima de brutales represiones. En 1932 el líder comunista Farabundo Martí encabezó una rebelión popular que fue ahogada en sangre, y la violencia reaccionaria se desplegó durante gran parte del siglo. Matanzas campesinas sin pausa; fuerzas armadas entrando a la Universidad Nacional destrozando su biblioteca para luego arrasar lo que quedaba en pie con el avance de sus tanques; masacres de aldeas enteras; asesinato de los jesuitas de la Universidad Centroamericana y de Monseñor Romero mientras consagraba la eucaristía; escuadrones de la muerte torturando y asesinando por doquier con la bendición y la cobertura de Washington. Todo eso en el país más pequeño de América Latina -el "pulgarcito" como dijera el poeta Roque Dalton- que pese a ello demostró tener unas agallas increíbles y con la guerrilla del FMLN lograr un éxito militar que casi no tiene

parangón a nivel internacional: contener la campaña de exterminio lanzada por el ejército salvadoreño bajo la conducción efectiva y descarada de oficiales estadounidenses y así forzar un acuerdo de paz, que hubiera sido imposible si la guerrilla hubiera sido derrotada. Sólo porque esa guerra terminó en un empate –en realidad, una derrota para el Pentágono- es que fue posible llegar a un acuerdo de paz. Importante, aunque insuficiente. Pero el salvadoreño es un pueblo que no se arredra ante las derrotas y sigue luchando. Estamos seguros que más pronto que tarde recogerá los frutos de su heroísmo en la medida en que este combate no se circunscriba al ámbito económico y político e incluya también, como uno de sus principales teatros de operaciones, la “batalla de ideas” a los cuales Fidel nos convocara hace ya muchos años. Porque sin prevalecer en este crucial terreno, sin ganar el combate en el campo de las ideas y la conciencia, todas las demás conquistas pueden desbaratarse como un castillo de arena. Por suerte son cada vez más quienes en El Salvador sostienen esta convicción. Serán las “trincheras de ideas” martianas que frustrarán los designios estadounidenses de convertir a ese país en una gigantesca base de operaciones de contra-insurgencia para, desde allí, aplastar los procesos progresistas y de izquierda que se agitan por toda la región.

LA “BATALLA DE STALINGRADO” SE LIBRARÁ EN ECUADOR.

Por: Atilio Borón

El domingo 19 de febrero un hermoso y entrañable país de Sudamérica será el escenario de una decisiva “batalla de Stalingrado”. Como se recordará, la que tuvo lugar en aquella ciudad rusa fue la que produjo el vuelco de la Segunda Guerra Mundial. Si Stalingrado caía los aliados serían despedazados por el ejército nazi; si, en cambio, la ciudad resistía el asedio, como lo hizo, las tropas hitlerianas jamás repondrían fuerzas y se encaminarían hacia su inexorable derrota. La propaganda norteamericana dice que este punto de inflexión en la guerra se produjo con el desembarco de Normandía, pero eso es un invento de Hollywood que no resiste la confrontación con los datos duros de la historia. La Segunda Guerra Mundial se decidió en aquella ciudad rusa, misma que puso en marcha la contraofensiva del Ejército Rojo que llegó hasta el corazón mismo del régimen nazi: Berlín.

Conscientes de que con una derrota de Alianza País en el [Ecuador](#) la derecha continental tendría las manos libres para asfixiar a Bolivia y provocar una nueva versión de la “revolución de colores” en Venezuela-al estilo de los sangrientos episodios desencadenados en Libia y Ucrania-sus personeros, languaraces y activistas se dejaron caer con todas sus fuerzas en Ecuador para librar la guerra de la desinformación, propalar mentiras, lanzar tremebundas acusaciones contra el gobierno e infundir la sospecha y el desencanto en la población. El objetivo excluyente: impedir que [Lenin Moreno](#), el candidato presidencial de AP, pueda alcanzar el 40 % de los votos y, de ese modo, con una diferencia mayor al 10 % en relación a su perseguidor, ser ungido como nuevo presidente. Para satisfacer este turbio designio Washington y Madrid despacharon al Ecuador un ejército de pseudo-periodistas, una ponzoñosa canalla mediática que ha venido desempeñando + Esos sujetos ocultan su verdadera condición de militantes rentados de la derecha (¡espléndidamente remunerados, por cierto, porque no trabajan gratis!) y su inescrupulosidad y desfachatez no tiene límites. En su revelador libro el ex agente de la CIA, John Perkins, habla de la absoluta frialdad con que se planeaban y ejecutaban los más atroces crímenes obedeciendo sin ninguna clase de reparo moral las instrucciones procedentes de Langley. Del mismo modo, los crímenes comunicacionales de la canalla mediática con aún más grave, porque son verdaderas armas de destrucción masiva. Los killers de la CIA matan selectivamente, a uno, dos o tres; el terrorismo mediático hiere mortalmente la conciencia de millones y los induce, con sus mentiras y sofisticadas manipulaciones, a elegir gobiernos que a poco andar practicarán un lento, silencioso pero eficaz genocidio de los pobres, los indígenas, los viejos, los jóvenes privados de educación y trabajo. En suma, acabar con toda esa población “excedente” que según nuestras clases dominantes son la lacra que impidió que los países latinoamericanos o caribeños sean como Suiza, Alemania o mismo los Estados Unidos. En tiempos de la última dictadura cívico-militar argentina sus voceros declaraban, sin disimulo, que en ese país sobraban por lo menos diez millones de habitantes; esa convicción también está

presente en el gobierno actual, sólo que no se lo declara abiertamente y que el número de los sobrantes, probablemente, sea todavía mayor. Y lo mismo hemos escuchado en Brasil, en Colombia y en tantos otros países de Nuestra América. Lo que la canalla mediática hizo en todos estos países contraría todas las normas de la ética, no sólo periodística. En el caso argentino mintieron alevosamente asegurando que el hecho de que el candidato Mauricio Macri estuviese procesado por haber solicitado "escuchas ilegales" para nada ensuciaba su buen nombre y honor o lo inhabilitaba para su postulación presidencial. Y ya instalado en la Casa Rosada potenciaron su inmoralidad al blindarlo mediáticamente a pesar de estar involucrado en numerosas empresas denunciadas en los Panamá Papers y en los archivos de las Bahamas, lo que en otras latitudes ocasionó la renuncia de varios jefes de estado y altos funcionarios acusados de evasión fiscal y lavado de dinero.

Esa plaga está subrepticamente actuando en Ecuador, ocultando sus verdaderos designios detrás de una supuesta condición de "periodista independiente." Gentes entrenadas en Washington (los famosos cursos de "buenas prácticas"), habilísimas en formular preguntas capciosas, sembrar el desánimo y potenciar hasta el infinito los problemas con que tropieza la gestión del gobierno de Rafael Correa que, como cualquier otro, tiene un mix de aciertos y desaciertos. Todo esto tiene su génesis en la radical transformación involutiva de la naturaleza y función del periodismo. Su naturaleza: por el tránsito del pluralismo de medios a los fenomenales niveles de concentración existentes hoy día. Su función: si en el pasado era ser el dispositivo que permitía diseminar información en la naciente sociedad de masas, con la crisis de la dominación capitalista producida por la irrupción de vigorosas fuerzas contestatarias – movimientos obreros, campesinos, indígenas, estudiantes, mujeres, jóvenes, ecologistas, organizaciones defensoras de derechos humanos, etcétera- su función cambió radicalmente. En ausencia -o ante la debilidad- de partidos de derecha competitivos (acostumbrados a encumbrarse en el gobierno de la mano de los golpes militares) los medios de comunicación hegemónicos pasaron a ocupar ese lugar, fenómeno éste precozmente detectado por Antonio Gramsci en sus escritos desde la cárcel. En ausencia de tales partidos, los medios toman su lugar y cumplen la función que les es propia: organizan, "educan", movilizan a amplios sectores de nuestras sociedades, siempre detrás de un programa conservador convenientemente edulcorado, pero sin despertar las sospechas que suscita el activismo partidario porque en el imaginario popular la prensa es "independiente" e inmune a los intereses y las intrigas políticas. Que esos medios se convirtieron en un arma formidable de dominación burguesa lo atestiguó, hace algunos años, un militar de alto rango del Pentágono cuando, en una audiencia ante el Senado de los Estados Unidos, lanzó una fatídica advertencia: "en nuestros días –dijo- la lucha antisubversiva se libra en los medios, no en las selvas o en los suburbios decadentes del Tercer Mundo." Y los gobiernos progresistas y de izquierda de América Latina, aun los más moderados, son todos percibidos como ladinos y arteros instrumentos de la subversión.

Por eso estamos en guerra, Ecuador está en guerra. Una guerra silenciosa pero cargada de violencia; una guerra de desinformación, de ocultamiento, de mentiras hábilmente maquilladas y que son vendidas bajo la apariencia de verdades objetivas e irrefutables. La meta que persigue es distorsionar la percepción de la realidad para generar una respuesta inconsciente de la ciudadanía que estigmatice al candidato de AP y descalifique los diez años del gobierno de Rafael Correa. Ocultar o, cuando esto no fuese posible, minimizar todo lo bueno que ha sido hecho y agigantar y machacar a diario, hora tras hora, minuto tras minuto, sobre los supuestos "fracasos" del gobierno saliente, sus problemas o sus desaciertos. La reciente denuncia en contra del candidato a la vicepresidencia, Jorge Glas, es un ejemplo contundente de lo que venimos diciendo. Es una operación que en América Latina se ha repetido hasta el cansancio en los últimos tiempos, con adaptaciones locales para darles una cierta verosimilitud. Este tipo de mentiras y falsedades se utilizaron masivamente en la campaña presidencial de la Argentina en el 2015 y en contra de Evo Morales en el referendo boliviano del 2016. Y es moneda corriente en el ataque al gobierno de Nicolás Maduro en los últimos tres años. Nada nuevo. Es lo que en la jerga de la CIA se conoce como "SOP" (standard operating procedures) a la hora de desestabilizar un gobierno o desprestigiar un candidato o una fórmula que es vista como una amenaza a los intereses de los Estados Unidos y la derecha vernácula. Esta carroña mediática es digna heredera de Joseph Goebbels, quien fuera Ministro para la Ilustración Pública y Propaganda del régimen nazi. Con un atenuante: por lo menos el alemán declaraba explícitamente que lo suyo era hacer propaganda; sus émulos actuales, en cambio, posan de "periodistas objetivos e independientes" pero lo que hacen es mentir, difamar y manchar la

dignidad de las víctimas de su labor. Mediante esta guerra de desinformación se trata de presentar a la oposición como democrática e, inclusive, "progresista" para engañar al electorado y acabar con la obra iniciada hace una década y que cambiara, para bien, la fisonomía social del Ecuador. Si estos agentes del engaño y la mentira llegaran a salirse con la suya y lograran que el pueblo le abriera las puertas a la derecha, el retroceso social, económico y cultural que sufriría este país sudamericano sería inmenso. A esta involución se le agregaría un ejemplar escarmiento, para que nunca más a las ecuatorianas y los ecuatorianos se les vuelva a ocurrir tener un gobierno como el de Rafael Correa. Un gobierno que todavía hoy rechaza con valores humanistas y con patriotismo las intensas presiones del imperio para que le ponga fin al asilo diplomático concedido a un personaje como Julian Assange, quien con sus revelaciones a través del Wikileaks permitió que el mundo viera como Washington nos miente, vigila y extorsiona a nuestros gobiernos a través de miles de tentáculos. Si la Alianza País fuese derrotada nadie daría un centavo por la vida de ese valiente luchador que junto con Edward Snowden y Chelsea Manning recorrieron el telón que ocultaba las manipulaciones y los crímenes del imperio. Y tras cartón la base de Manta volvería a ser ocupada por las tropas estadounidenses.

Para los escépticos, para quienes crean que estamos exagerando, basta con examinar lo ocurrido en la Argentina, en donde este engaño inducido por el "periodismo independiente" hizo posible el triunfo del actual gobierno y el desencadenamiento de la debacle económica actual: caída del PIB, inflación descontrolada, brutal deterioro del salario, cierre de fábricas y comercios, despidos masivos, aumento del desempleo e incrementos exorbitantes de los precios de la electricidad, el gas, el agua y el transporte. La oligarquía mediática fue un instrumento poderosísimo al servicio de los monopolios y los sectores adinerados y del privilegio. Por eso insistimos en la urgente necesidad de que los ecuatorianos se pongan en guardia ante el canto de sirena de esos "pseudos periodistas", hagan oídos sordos a sus prédicas de la necesidad de un cambio y miren al Sur, vean lo que está ocurriendo en la Argentina y lo que se esconde bajo la inocente invocación de que cambiemos. En su ingenuidad y falta de conciencia política millones en la Argentina creyeron en el cambio prometido -sin preguntarse cambiar qué, cómo, en qué dirección, bajo qué liderazgo- para encontrarse, de la noche a la mañana, en medio de un naufragio. El gobierno de Rafael Correa puede haber incurrido en yerros y desaciertos, como cualquier otro en este mundo. En medio siglo de profesión como politólogo jamás pude encontrar un solo gobierno que estuviera exento de yerros, equivocaciones e inclusive de variables niveles de corrupción. Si según el Papa Francisco estos problemas atribulan inclusive al Vaticano -que como recordaba mordazmente Maquiavelo era lo más parecido a un estado perfecto porque gozaba de la protección directa de Dios- sería absurdo pensar que el Ecuador podría estar libre de esos vicios. La diferencia es que en este país es el propio gobierno quien los denuncia penalmente, mientras que en otros países sudamericanos los gobiernos los encubren y le brindan protección judicial y mediática a los corruptos. El caso de Brasil es de una elocuencia inigualable al respecto. Para concluir: hecho el balance que cada ciudadana y ciudadano debe hacer concluirá sin duda que los aciertos del gobierno ecuatoriano en los últimos diez años, tanto en el plano nacional como en el internacional superan con creces los desaciertos en que haya incurrido. Y ese es el quid de la cuestión y la razón por la que, en toda América Latina, esperamos que el pueblo ecuatoriano vote por la continuidad del gobierno de la Alianza País y se abstenga de dar un salto al vacío como el que dieran los argentinos inducidos por la malignidad de la plaga mediática que hoy asola al Ecuador.

CONSTANTINO EN LA ROMA AMERICANA

Por Atilio Borón*

Entre el 7 y 8 de julio próximo tendrá lugar en Hamburgo una nueva cumbre de jefes y jefas de Estado y del G-20, entre los cuales se encuentra la Argentina.

El cónclave será presidido por Angela Merkel, y muchos participantes seguramente recordarán que en numerosas cumbres previas Cristina Fernández de Kirchner advertía sobre el rumbo equivocado de la economía mundial, los estragos del neoliberalismo, las trampas del libre cambio y los malhadados tratados de libre comercio. Cuando decía esas cosas los plumíferos de la

derecha, dentro y fuera de la Argentina –en realidad, una impresentable colección de relacionadores públicos de las grandes transnacionales disfrazados de "economistas serios" o de "periodistas independientes" se burlaban de lo atrasado de sus concepciones económicas, la acusaban estúpidamente de "setentista" y no cejaban de reprocharle por el "anacronismo" de sus críticas al orden económico internacional, responsable de que la Argentina se encontrara "aislada del mundo."

Quisiera ver qué dirán en ese momento los secuaces de Washington y sus paniaguados en los medios cuando escuchen a Trump pronunciar un discurso muy semejante al de Cristina, porque los desastres que el Consenso de Washington hizo en todo el mundo no exceptuaron a Estados Unidos.

¿Qué van a decir? Trump, para nada santo de mi devoción (como cualquier otro presidente de los Estados Unidos) comprendió que para reconstruir a su país tenía que arrojar por la borda las ideas que habían presidido las políticas económicas de la Casa Blanca desde comienzos de los ochenta.

En su iconoclastico discurso inaugural proclamó el regreso al proteccionismo de los padres fundadores de la sociedad norteamericana (Alexander Hamilton, primer secretario del Tesoro fue un contumaz proteccionista), denunció a la clase política tradicional –apañada y financiada por los agentes empresariales del neoliberalismo de enriquecerse mientras la gran mayoría del país se empobrecía y las empresas y los empleos emigraban a otras latitudes y el "sueño americano" se convertía en una intolerable pesadilla.

Trump pretende dispararle el tiro de gracia al neoliberalismo porque su virus –para usar la expresión de Samir Amin– contagió a la potencia integradora del sistema imperialista y sus efectos son letales.

Habrá que ver si lo que en una nota anterior llamábamos "Estado profundo", o el "gobierno invisible" de EEUU le permite concretar su propósito. En todo caso, el discurso de Washington giró ciento ochenta grados y lo que antes era virtud ahora es un vicio a combatir sin cuartel. Ante este giro casi todos los gobiernos de América Latina, comenzando por el de Argentina, se quedaron pedaleando en el aire.

Al hablar de EEUU José Martí solía usar la expresión "Roma Americana." Siguiendo con esa sugerente analogía podría decirse que el viraje antineoliberal de Trump guarda semejanza con lo ocurrido cuando el emperador Constantino, acosado por rebeliones que conmovían la inmensidad del imperio romano y en las cuales los cristianos eran la punta de lanza, dio a conocer, en el año 313, el Edicto de Milán que convertía al cristianismo en la religión oficial del imperio y declaraba heréticas las demás religiones. No hay que exagerar demasiado esta analogía pero, como se dice en italiano, "se non é vero é ben trovato".

Va de suyo que este giro hacia el "populismo económico" no lo hace Trump por simpatías con el socialismo del siglo veintiuno o las luchas emancipadoras de los países de la periferia. Menos todavía, como piensan algunos, para ensayar un "peronismo a la americana" porque al magnate neoyorquino ni remotamente se le pasa por la cabeza nacionalizar el comercio exterior, los depósitos bancarios, la Reserva Federal (un ente privado) o los medios de transporte, como hiciera Perón en la Argentina de la posguerra. Lo hace porque cayó en la cuenta de que el neoliberalismo está silenciosamente destruyendo a Estados Unidos.

Como sea, los que antes, en el G-20 apostrofaban a Cristina, ahora escucharán un discurso casi idéntico de labios del nuevo Constantino. Seguramente antes de lo que ella hubiera pensado la ex presidenta experimentará el íntimo regocijo de la reivindicación de sus justas críticas al orden económico internacional. ¡Y nada menos que de labios del nuevo emperador!

***Político y sociólogo argentino**

FUSIONES Y OLIGOPOLIOS

En esta década el margen de fusiones y adquisiciones sobrepasa las 30 000 operaciones anuales, con un valor equivalente al 3 % de la economía mundial.

Por: [Julio Martínez Molina](#)

Las teorías de los grandes filósofos materialistas ya profetizaban las concentraciones extraordinarias de riquezas, en tanto parte de la acumulación capitalista. No obstante, su tiempo

histórico les imposibilitó, no ya ver, ni siquiera prever el alcance y las consecuencias de las actuales megafusiones mundiales.

En esta década el margen de fusiones y adquisiciones sobrepasa las 30 000 operaciones anuales, con un valor equivalente al 3 % de la economía mundial.

Pese a que tales alianzas o absorciones forman parte del ciclo natural del capitalismo y a lo largo del siglo en curso se han realizado numerosas de alto y mediano impacto universal, resultó el 2016 un año pródigo para su formación (33 300 acuerdos, contra 11 500 en 1990) dentro de algunos de los más grandes conglomerados corporativos.

Especialmente significativa, por el volumen de perjuicios que podría reportar a la especie humana, es la de las empresas Bayer y Monsanto. La multinacional germana adquirió a la estadounidense y mayor fabricante de transgénicos por un costo de 66 000 millones de dólares. Así, la primera se convertirá en la primera productora de semillas y pesticidas del planeta.

El prontuario de ambos oligopolios contra la salud humana más aún la firma norteamericana, tristemente célebre, entre tantos crímenes, por fabricar el agente naranja empleado por los agresores yanquis en la guerra de Vietnam, resulta tan dilatado en el tiempo, que la anunciada unión (ya oficializada, aunque prevista para rubricarse en el 2017) ha puesto en alerta a organizaciones, científicos, expertos de la Medicina y el medioambiente, científicos sociales... AT&T, la décima compañía por recursos y montos de operaciones en Estados Unidos, está en planes de absorber a Time

Warner, la número 99, luego de haberse engullido a DirectTV poco antes, 48 500 millones mediante. El costo de la nueva venta se ha valorado en 108 700 millones de dólares. De esta forma, el emporio de las comunicaciones con base en Dallas poseerá bajo su égida a emblemas de la información y el entretenimiento como la cadena HBO; amén de CNN, TNT y del estudio cinematográfico Warner Brothers.

De un plumazo anulan la competencia, cobran dimensión e incidencia y se apropian de iconos de la cultura y la ideología norteamericanas.

De acuerdo con los especialistas en economía, la fusión convertirá a la segunda mayor compañía de telefonía móvil de Estados Unidos –ya acusada antes de la fusión de vender metadatos de sus centenares de millones de cliente al gobierno–, en un conglomerado de medios y entretenimiento que ofrecerá a la vez servicios de conexión a Internet en los hogares y programas de televisión.

Al respecto, la organización Free Press ha emitido un comunicado en el cual afirma: «Esta fusión generará un imperio mediático nunca antes visto. AT&T controlará el acceso a Internet móvil y por cableado, canales de televisión por cable, franquicias de películas, un estudio de cine y televisión y otras empresas de la industria. Eso significa que AT&T controlaría el acceso a Internet de cientos de millones de personas, así como el contenido que miran, lo que le permitiría dar prioridad a su propia oferta y hacer uso de recursos engañosos que socavarían la neutralidad de la red».

También en el 2016 el Yahoo se hizo de Verizon; AB Inbev absorbió a SABMiller; Marriot se fusionó con Starwood, como igual procedieron Cablevisión y Altice; mientras que Comcast compró a NBC Universal y Time Warner Cable, por citar algunas de las miles de operaciones registradas.

En realidad, algunos de los teóricos capitalistas, los históricos y sobre todo los actuales, advirtieron que la concentración de intereses en semejantes emporios pone freno a la competencia.

Y, desde el punto de vista político, la presión de esos oligopolios sobre los grandes actores de poder podría enrumbar aún más las estrategias en función de sus necesidades: por regla, inversas a las de esa demográficamente determinante parte del mundo, pobre, desfavorecida o en camino al desarrollo.

EL GOBIERNO TEMPORAL DE DONALD TRUMP: UNA REDOBLADA AMENAZA PARA NUESTRA AMÉRICA

Por. [Luis Suárez Salazar](#)

Introducción

Como se indica en su título, este ensayo va dirigido a realizar una primera y seguramente incompleta aproximación a las redobladas amenazas que les planteará la recién inaugurada administración de Donald Trump a los pueblos, las naciones y a ciertos gobiernos de los 33 Estados nacionales o plurinacionales ubicados al sur del río Bravo y de la península de Florida. Asimismo, a los de algunos de los territorios de esa región aún sometidos a diferentes formas de dominación colonial por parte de Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Holanda.

Para cumplir ese propósito, las páginas que siguen se dividirán en tres acápites. En el primero me referiré a los que he denominado objetivos estratégicos, generales y, en determinados casos, específicos que guiaron las "estrategias inteligentes" hacia el sur político del continente americano desplegadas por las dos administraciones de Barack Obama. En el segundo, realizaré varias referencias a los enunciados sobre "la familia de las Américas" plasmados en la reaccionaria Plataforma del Partido Republicano (PPR) aprobada en la Convención efectuada en Cleveland a fines de julio del 2016. Y, en el tercero, presentaré mis consideraciones preliminares sobre el escenario más probable de las políticas hacia América Latina y el Caribe que desplegarán los grupos de poder y los poderes fácticos de los Estados Unidos, al menos, en los dos primeros años del gobierno temporal del controvertido, racista, misógino, homofóbico y xenofóbico magnate inmobiliario y "miembro de la clase capitalista transnacional" Donald Trump (Robinson, 2016); quien, siguiendo sus peores prácticas empresariales y a causa de los "conflictos de intereses" que se crearán entre éstas y sus altas responsabilidades estatales, parece decidido a llevar "la corrupción" a un "nuevo nivel" en la conformación y el funcionamiento de su gabinete (Baker, 2017).^[1]

Como en otros de mis ensayos, ese escenario se elaborará desde los principales conceptos teóricos y metodológicos de la prospectiva crítica. Esta parte del criterio de que el futuro es "más construible que previsible". Por tanto, "no es único, ni lineal". Al contrario, pueden vislumbrarse varios escenarios alternos. Ninguno está predeterminado, ya que dependen de los resultados de las acciones reactivas, preactivas y proactivas del "hombre colectivo". En consecuencia, el porvenir es un *campo de batalla* (muchas veces violento) entre los sujetos sociales y políticos, estatales y no estatales, que "pungan por imponer su poder para defender sus intereses" (Mojica, 2000).

En mi consideración, sin negar la impronta y los márgenes de decisión de cualquier mandatario, la utilización de esos conceptos es necesaria; ya que en la mayor parte de las aproximaciones que he podido leer sobre la que será la proyección externa de los Estados Unidos durante la actual administración republicana se olvida que, con independencia de las posiciones personales de cualquier presidente (por muy "atípico", "imprevisible", "errático", "volátil", "egocéntrico" o "megalómano" que sea),^[2] la política interna y externa que desarrollará esa potencia imperialista durante el gobierno temporal de Donald Trump será *la resultante* de los consensos previamente existentes o que se reelaboren entre los representantes políticos, militares, intelectuales e ideológico-culturales de los diferentes sectores de las clases y los grupos dominantes que participan en las diferentes instancias de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Igualmente de las percepciones que estos tengan con relación a los resultados (positivos o negativos) de las políticas desplegadas por la administración precedente, tanto para sus propios intereses y cuotas de poder, como para la preservación de la que he denominado "seguridad imperial" de los Estados Unidos.

Como he tratado de demostrar en diferentes publicaciones (Suárez, 2003, 2006 y 2010), lo antes dicho contribuye a explicar las continuidades de los objetivos estratégicos, generales y, en ciertos casos, específicos, al igual que de muchas de las estrategias desplegadas y las herramientas utilizadas por las diferentes administraciones estadounidenses, aun cuando estas hayan sido controladas por diferentes sectores de los partidos demócrata o republicano. También los cambios de conceptos, estrategias o en el empleo de ciertas herramientas que se han producido entre una y otra administración e, incluso, durante los sucesivos mandatos de algunas de ellas.

Esas continuidades y esos cambios igualmente han estado influidos y en algunos casos determinados por sus consideraciones acerca de la correlación internacional de fuerzas

existentes, así como, en menor medida, por las reacciones de las clases y grupos subalternos estadounidenses frente a las políticas internas o externas desplegadas por cada uno de esos gobiernos temporales. Asimismo por la calidad de las resistencias que les hayan ofrecido a estas últimas otros actores sociales y políticos, gubernamentales y no gubernamentales, de otros Estados del mundo.

Los objetivos hemisféricos de las dos administraciones de Barack Obama

Como indiqué en una ponencia que presenté en un evento internacional efectuado en noviembre del pasado año en la Universidad Nacional de Colombia (Suárez, 2016), entre el 2009 y el 2016 la maquinaria de la política exterior, de defensa y de seguridad estadounidense, al igual que sus aparatos económico-financieros, propagandísticos e ideológico-culturales emprendieron diversas acciones públicas, discretas, encubiertas o secretas dirigidas según indicó Barack Obama durante su primera campaña electoral y reiteró en otros documentos posteriores a "renovar" y a "prolongar a lo largo del siglo XXI el liderazgo estadounidense en las Américas" (Obama, 2008).

Con tal fin, durante sus dos administraciones, de manera unilateral o concertada con sus "amigos", "socios" o "aliados", estatales y no estatales de dentro y fuera del continente americano, la poderosa maquinaria burocrático-militar estadounidense (generalmente con el apoyo bipartidista del poder legislativo y, en las ocasiones necesarias, del poder judicial)^[3] emprendió diversas acciones orientadas a cumplir, al menos, los siguientes objetivos generales o específicos ínter vinculados entre sí:

1.- Desestabilizar y, donde y cuando le resultó posible, derrocar por medios predominantemente "institucionales" a aquellos gobiernos latinoamericanos y caribeños genéricamente calificados como "anti-estadounidenses".^[4] En particular, aunque no únicamente (como se demostró en Paraguay), a los gobiernos que eran (cual fue el caso de Honduras hasta mediados del 2009) o todavía son miembros plenos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio entre los Pueblos (ALBA-TCP): Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y la República Bolivariana de Venezuela.

Contra los gobiernos de este último país, presididos por el comandante Hugo Chávez y por Nicolás Maduro, se desplegaron y se siguen desplegando diversas acciones contrarrevolucionarias bajo el supuesto que su derrocamiento produciría un negativo "efecto domino" sobre los gobiernos de los demás Estados integrantes del ALBA-TCP (incluido el de Cuba) y para las interrelaciones que estos habían desplegado con otros gobiernos centroamericanos y caribeños en los marcos de PETROCARIBE y del fondo ALBA-Caribe.

2.- Restaurar o fortalecer, según el caso, su multifacética dominación neocolonial sobre México, sobre todos los Estados-nacionales ubicados en el istmo centroamericano, al igual que en el Caribe insular y continental (Belice, la República Cooperativa de Guyana y Surinam) con vistas a preservar su control sobre los recursos naturales y los bienes públicos (como el agua y la biodiversidad), al igual que sobre los diversos espacios geoestratégicos existentes en el Gran Caribe: el Golfo de México, los estrechos de la Florida y Yucatán, el Paso de los Vientos, el Canal de Panamá, el canal de la Mona y las diversas rutas aéreas, marítimas y terrestres que sirven para transitar entre el Sur y el Norte del continente americano, así como entre los océanos Atlántico y Pacífico.

Para el cumplimiento de esos propósitos, a la administración de Barack Obama le resultó de mucha utilidad la continuidad de sus estrechos vínculos político-militares con los gobiernos europeos integrantes de la Organización del Atlántico Norte (OTAN) que mantienen diversas posiciones coloniales en el Caribe insular y continental, así como el fortalecimiento de la dominación colonial estadounidense sobre Puerto Rico. Esta registró un nuevo salto de calidad con la aprobación de la denominada Ley PROMESA signada en el 2016 por Barack Obama. Esta estableció una Junta Fiscal orientada a garantizar, primero que todo, que los gobiernos de ese mal llamado Estado Libre Asociado paguen la multimillonaria deuda contraída con diversas instituciones financieras estadounidenses, incluidos algunos "fondos buitres" (Torres, 2016).

3.- Lograr una solución político-militar favorable a los intereses geopolíticos y geoeconómicos estadounidenses de la prolongada guerra civil con contenidos de liberación nacional y social que hasta mediados del 2016 se estaba desarrollando en Colombia. Sin importar los inmensos costos humanos, sociales y ecológico-ambientales provocados por la voluminosa ayuda económica y militar que le ofrecieron diversas administraciones demócratas y republicanas estadounidense (Higuera, 2016), los "éxitos" de los gobiernos presididos por Álvaro Uribe y por Juan Manuel Santos, al igual que por las represivas fuerzas militares colombianas en su cruenta guerra "contra la insurgencia y el narco-terrorismo" fueron presentados por la administración de Barack Obama y por el Pentágono como "el modelo" a seguir por los gobiernos y las fuerzas armadas y policiales de otros países de dentro y fuera del hemisferio occidental enfrentados a semejantes amenazas; en particular, por México, por los Estados del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala), así como por Perú y Paraguay (Tickner, 2014, Kinoshian *et al*, 2015);

4.- Subordinar a los intereses geoestratégicos estadounidenses a los gobiernos de todos los Estados nacionales del hemisferio occidental ubicados en el "arco del Pacífico": Canadá, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Funcional a ese propósito fueron las exitosas negociaciones del Tratado Transpacífico (TPP) impulsadas por el gobierno de los Estados Unidos como parte de su llamado "pilar asiático" (orientado a contener la creciente proyección externa de la República Popular China), al igual que su constante respaldo a la Alianza para el Pacífico (ALPA), institucionalizada en el 2011 entre los gobiernos de México, Colombia, Perú y Chile, presididos por Felipe Calderón, Juan Manuel Santos, Allan García y Sebastián Piñera, respectivamente. Sus antecesores, previamente, habían firmado asimétricos tratados bilaterales de libre comercio con Estados Unidos y ellos o sus sucesores (cual fue caso del mandatario peruano Ollanta Humala y de la presidenta chilena Michelle Bachelet), firmaron diversos tratados en el campo de la defensa y la seguridad con las dos administraciones de Barack Obama, orientados a "compartir responsabilidades y costos" con la maquinaria militar estadounidense en la "defensa del hemisferio Occidental" (Suárez [2014] 2016);

5.- Contrarrestar las amenazas que le plantearon a la hegemonía estadounidense en el sur político del continente americano y en particular en Suramérica la paulatina e inconclusa transformación de la República Federativa de Brasil en una "potencia global", al igual que aquellas posturas "populistas radicales" o desfavorables a los intereses de los Estados Unidos asumidas por algunos de los partidos (o sectores de ellos) integrantes de las heterogéneas coaliciones políticas que hasta el 2012 apoyaron al gobierno paraguayo presidido por Fernando Lugo, así como que, hasta el 2015 y el 2016, habían sustentado los gobiernos de Argentina y Brasil, presididos por Cristina Fernández de Kirchner, Luis Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, respectivamente. Igualmente, por algunos de los partidos integrantes del Frente Amplio-Encuentro Progresista que sustentaron y todavía sustentan a los gobiernos uruguayos presididos por José Mujica y Tabaré Vázquez.

Lo antes dicho y otros elementos que veremos en el numeral siguiente contribuyen a explicar el rápido respaldo que le ofreció la administración de Barack Obama al gobierno argentino presidido por el multimillonario neoliberal Mauricio Macri, así como, aún antes de que se consumara totalmente, al "golpe de estado parlamentario-mediático y judicial" que en el 2016 se produjo en Brasil contra la presidenta constitucional brasileña Dilma Rousseff. Esta fue sustituida por su corrupto vicepresidente Michel Temer; quien de inmediato comenzó a subordinar sus políticas internas y externas a algunos de los objetivos de la política global y hemisférica estadounidense.

6.- Dificultar la reforma y la ampliación del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) impulsada por los derrocados gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay antes mencionados, al igual que por sucesivos gobiernos uruguayos, así como la profundización de los acuerdos en los campos políticos y de la defensa adoptados por la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR); en especial, aquellos que cuestionaron los intereses geopolíticos, geoeconómicos (incluidos el control de los recursos naturales estratégicos y los bienes públicos) y geoestratégicos apetecidos por los grupos dominantes en Estados Unidos, cuales son las estratégicas Cuencas de los ríos

Orinoco, Amazonas y de la Plata, el portentoso acuífero Guaraní, al igual que los archipiélagos ubicados en el Atlántico Sur (entre ellos, las Islas Malvinas) y los estrechos y las aguas que lo conectan con el Pacífico Sur y con la Antártida (Boron, 2012);

7.- Entorpecer las acciones de los diversos gobiernos de América Latina y el Caribe que, entre fines del 2008 y del 2011, condujeron a la fundación la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y, como no lo lograron, evitar que sus resoluciones y prácticas obstaculizaran el adecuado cumplimiento de los diversos acuerdos y planes de acción aprobados por las Cumbres de las Américas (ordinarias o extraordinarias) celebradas entre 1994 y el 2015, al igual que por los principales órganos político-militares, financieros y político-jurídicos del Sistema Interamericano: la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus diversas Comisiones; el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Junta Interamericana de Defensa (JID).

Funcional a ese último propósito fueron la acérrima defensa por parte de los representantes de los Estados Unidos de las parcializadas labores desplegadas por la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y por la CIDH (Aportes, 2014); el apoyo que –modificando sus posturas anteriores y sobre la base de la Ley al respecto firmada por Barack Obama a fines del 2013 el Departamento de Estado comenzó a ofrecerle a “la reforma” de esa organización propuesta por su ex secretario general, José Miguel Insulza, y reimpulsada por su controvertido y pro-panamericanista sustituto, el ex canciller uruguayo Luis Almagro.

Paralelamente, en correspondencia con la “nueva etapa” de sus relaciones con Cuba anunciada el 17 de diciembre de 2014, así como con sus perdurables propósitos de producir cambios del (o en el) “régimen cubano” (Obama, 2016), la administración de Barack Obama finalmente aceptó que el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros (CEEM) de la República de Cuba, Raúl Castro, participara, por primera vez en la historia de esos eventos, en la VII Cumbre de las Américas realizada en Panamá en abril del 2015. Según el criterio del antes mencionado presidente estadounidense, con tal acción y con el restablecimiento posterior de sus relaciones diplomáticas con Cuba se eliminó un factor irritante en el desenvolvimiento de las relaciones interamericanas y se fortaleció “el liderazgo de los Estados Unidos en el hemisferio occidental” (Ibídem).

Cualesquiera que sean los juicios que merezcan esas afirmaciones, lo cierto fue que la decisión de admitir la participación del presidente cubano en la antes mencionada Cumbre de las Américas tuvo como uno de sus propósitos superar las grandes dificultades que sufrió el desenvolvimiento de ese cónclave durante su VI Cumbre efectuada en el 2012 en Cartagena, Colombia, al igual que re-legitimar a la OEA, en su conjunción con el BID, como “la entidad diplomática multilateral primordial” en la supervisión y gestión de los acuerdos de esas Cumbres destinados al “fortalecimiento de la paz y la seguridad, la promoción y consolidación de la democracia representativa, la resolución de conflictos regionales, el fomento del crecimiento económico y la cooperación al desarrollo, la facilitación del comercio, la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y el crimen transnacional y el apoyo a la Comisión de Derechos Humanos” (Congress of The United of America, 2013).

Esos propósitos coincidieron con el interés del Pentágono, expresado en *La política de defensa para el hemisferio occidental* hasta el 2023 difundida en octubre de 2012 por el entonces secretario de Defensa Leon Panetta, en la que, entre otras cosas, se indicó: “Los Estados Unidos, mediante su participación en la OEA y mediante cada uno de nuestros compromisos ínter militares, *promoverán un férreo sistema de cooperación en materia de defensa* que procure hacer frente a los desafíos complejos del siglo XXI. [...] Nos esmeraremos *por reformar las instituciones existentes y aprovecharlas a fin de lograr una mayor eficacia y unidad de propósitos para abordar esta problemática que afecta a todos los países del hemisferio*” (Panetta, 2012, la cursivas fueron incorporadas por el autor de esta ponencia).

Con esos y otros fines, a partir del 2014, la diplomacia político-militar estadounidense, en consuno con la Secretaría de la JID, comenzó a impulsar la elaboración de un nuevo instrumento hemisférico que sustituya al obsoleto e inoperante Tratado Interamericano de Asistencia

Recíproca (TIAR), así como la institucionalización de una Comisión Interamericana de Defensa subordinada a la OEA que articule las labores de las Conferencias de Ministro de Defensa de las Américas, de Jefes de Ejércitos, Marina y Aviación, así como de los subsistemas regionales de defensa existentes en el hemisferio occidental (JID, 2014); incluido el subsistema del Norte América, sustentado en las estrechas relaciones establecidas entre las fuerzas militares de Canadá con el Comando Norte de Defensa Aeroespacial (NORAD, por sus siglas en inglés) y con el Comando Norte de las Fuerzas Armadas estadounidenses (NORTHCOM), cuya área de responsabilidad abarca el territorio, las costas y el espacio aéreo de Canadá, de los Estados Unidos (incluida Alaska), de México y del archipiélago de las Bahamas, ubicado en la entrada atlántica del estratégico estrecho de La Florida.

En el criterio del Jefe de esos dos comandos, almirante William Gortney, esa articulación está orientada a enfrentar las "amenazas tradicionales" y "no tradicionales" que les plantea a los Estados Unidos la proyección militar, política y económica de Rusia y de la República Popular China en el norte del hemisferio occidental. Asimismo, las acciones ciberespaciales, las pruebas nucleares y el continuo desarrollo de misiles balísticos por parte de Corea del Norte. Igualmente, las actividades diplomáticas y las capacidades de misiles balísticos de largo alcance y el programa espacial que está desarrollando Irán y los eventuales ataques terroristas contra el territorio estadounidense que, en el futuro, pudieran emprender el Estado Islámico y Al-Qa'ida (Gortney, 2016).

Una mirada a algunos enunciados de la PPR

No tengo espacio para plasmar mis consideraciones acerca de los logros para la seguridad imperial de los Estados Unidos obtenidos durante las dos administraciones de Barack Obama (y, en particular, durante su segundo mandato) en el cumplimiento total o parcial de cada uno de los objetivos generales y específicos señalados en el acápite anterior. Tampoco para referirme a los que no pudo cumplir. No obstante, en mi apreciación, unos y otros serán retomados por la administración de Donald Trump; ya que este se comprometió, entre otras cosas que veremos después, a defender el presunto "excepcionalismo" de su país, a "hacerlo más grande otra vez", a mantener su "posición natural como líder del mundo libre", a fortalecer la supremacía de sus fuerzas armadas en todo el mundo, a "restablecer la ley y el orden", así como a superar "la crisis que está atravesando la seguridad nacional estadounidense" (PPR, 2016: 3)

De ahí que, a pesar de la acritud de los tres debates que se produjeron entre la candidata presidencial del Partido Demócrata, Hillary Clinton, y el ahora presidente Donald Trump, los cambios que ambos se proponían introducir en las políticas hacia América Latina y el Caribe previamente desplegadas por el gobierno temporal de Barack Obama no estuvieron en el centro de la campaña electoral. Esto me indujo a pensar que ambos candidatos estaban decididos a mantener esos objetivos, así como a continuar la mayor parte de las estrategias elaboradas e implementadas por la poderosa maquinaria de la política exterior, de defensa y seguridad de los Estados Unidos durante los ocho años de esa administración.

Entre otras razones, porque casi todas esas estratagemas contaron con el mayoritario respaldo bipartidista en ambas cámaras del Congreso. Como veremos después, una de las pocas excepciones que confirman esa regla fueron el rechazo que encontraron en el Senado o en la Cámara de Representantes las diferentes enmiendas a las llamadas "leyes del embargo" contra Cuba que presentaron diversos senadores o representantes de ambos partidos políticos después del 17 de diciembre del 2014; incluido un proyecto de ley dirigido a restituirle el derecho de los ciudadanos estadounidenses a viajar y a gastar su dinero en la mayor de las Antillas sin que mediara ninguna licencia de la Oficina de la Control de Activos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC, por su sigla en inglés).

De ahí que los dos únicos problemas vinculados directamente a las políticas hacia el Hemisferio Occidental que se abordaron en los diferentes discursos del entonces candidato republicano fueron los relacionados con los negativos efectos que, según sus reiteradas opiniones xenófobas, racistas y "proteccionistas", estaban produciendo en la sociedad, en la cultura y en la economía estadounidense (en especial, en la industria manufacturera y en los niveles de empleo de los

trabajadores blancos con bajos niveles educacionales) algunas de las políticas migratorias y comerciales previamente desplegadas por la administración de Barack Obama. Y, dentro de estas últimas, la aprobación del TPP (negociado, entre otros, por los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Chile, México y Perú) y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que, desde 1994, había sido respaldado por todas las administraciones demócratas y republicanas.

Tal vez por ello, en la reaccionaria PPR, se acentuó la importancia de darle continuidad, con escasos cambios, a todas las estrategias en los campos comercial, energético, de la defensa y la seguridad que durante la administración de Barack Obama se han venido desplegando en consuno con los grupos de poder, los poderes fácticos y los sucesivos gobiernos temporales de Canadá y México, respectivamente encabezados por sus primeros Ministros Stephen Harper y Justin Trudeau, así como por los presidentes de México, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. A pesar de los degradantes ataques verbales contra los mexicanos emprendidos por Donald Trump, de sus reiteradas exigencias de renegociar el TLCAN como condición necesaria para permanecer en el mismo, así como de su amenaza de que, si ganaba las elecciones, el gobierno mexicano tendría que financiar el muro que desde más de 20 años se viene construyendo en la extensa frontera terrestre entre ambos países, en la antes mencionada PPR se indicó:

Nuestra atención a los temas del comercio y del medioambiente contribuirá a un fuerte crecimiento económico y a la prosperidad de las Américas. Agradecemos a nuestros vecinos en México y Canadá que hayan sido nuestros socios en la lucha contra el terrorismo y en la guerra contra las drogas. El pueblo mexicano merece nuestra asistencia por su brava resistencia a los carteles de las drogas que trafican con la muerte a ambos lados de nuestras fronteras. Su rica herencia cultural y religiosa, presente en millones de nuestros ciudadanos, deberá contribuir a un mayor entendimiento y cooperación entre nuestros países. Nuestros vecinos canadienses pueden contar con nuestra cooperación y respeto. Para avanzar en la independencia energética de América del Norte, intentaremos revertir el bloqueo de la actual administración al oleoducto Keystone XL. Además de su valor económico, ese proyecto ha devenido un símbolo de la contradicción entre el deseo público al desarrollo económico y la hostilidad gubernamental al crecimiento. Nosotros estamos con el pueblo (PPR, 2016: 50).

Por otra parte, con el lenguaje antediluviano empleado en muchas de sus páginas, en esa plataforma se indicó: "Un presidente republicano nunca abrazará a un dictador marxista, ni en Venezuela, ni en ninguna parte del mundo. El actual presidente del poder ejecutivo ha permitido que ese país se haya convertido en un estado narco-terrorista y que una avanzada iraní amanece a América Central, así como que Venezuela sea un cielo seguro para los agentes de Hezbollah". Y añadió: "Hoy con su país arruinado por el socialismo y en la senda del caos, el pueblo venezolano está luchando por restaurar su democracia y recuperar sus derechos. Cuando triunfen, como seguramente ocurrirá, los Estados Unidos estarán listos para ayudarlos a retornar a la familia de las Américas" (Ibídem).

Sin dudas, tales sintagmas expresaron el tajante rechazo de los redactores de esa plataforma (algunos de los cuales ocuparán prominentes posiciones en la administración de Donald Trump) a las conversaciones de alto nivel entre los actuales gobiernos de los Estados Unidos y de Venezuela que comenzaron a desarrollarse desde abril del 2015; pero, como se indicó en el primer acápite de este escrito, el contenido de esos enunciados se corresponden con las multifacéticas acciones contra la Revolución Bolivariana desplegadas por las dos administraciones de Barack Obama. Y, en particular, con los agresivos planes que, desde los primeros meses del 2015, ha venido organizando el SOUTHCOM (las llamadas Venezuela Freedom 1 y 2 Operations) después que el antes mencionado presidente estadounidense diera a conocer su Orden Ejecutiva de marzo de 2015 en la que calificó al actual gobierno venezolano como "una amenaza inusual y extraordinaria para la política exterior y la seguridad nacional estadounidense" (Weisbrot, 2015).

En esa misma tónica y en correspondencia con las estrategias hacia Colombia desplegadas por la maquinaria de la política exterior, de defensa y la seguridad de los Estados Unidos, así como rechazando de manera implícita el respaldo que la administración de Barack Obama le había ofrecido a los acuerdos de paz que en julio de 2016 todavía se estaban negociando en La Habana

entre los representantes del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del gobierno de ese país, la antes mencionada PPR señaló: "Reafirmamos nuestra amistad y admiración por el pueblo colombiano y llamamos a los congresistas republicanos a expresar su solidaridad con sus largas décadas de lucha contra las terroristas FARC. Los sacrificios y sufrimientos del pueblo colombiano no deben ser traicionados por el ascenso al poder de los asesinos y señores de las drogas" (PPR, 2016: 50).

Llama la atención que ese último enunciado formó parte de los pretextos empleados por el reaccionario ex presidente y ahora senador colombiano y líder del mal llamado Centro Democrático, Álvaro Uribe (estrechamente vinculado a algunos de los congresistas cubano-estadounidenses que apoyaron la candidatura de Donald Trump, cual es el caso de Mario Díaz Balart), para movilizar votos contra los acuerdos de paz firmados en La Habana en el desfavorable plebiscito para tratar de "blindarlos" que se efectuó en Colombia el 2 de octubre de 2016. Posteriormente, durante la ratificación de la segunda versión de esos acuerdos aprobada por el Senado y en la Cámara de Representantes colombiana en diciembre de ese año, los parlamentarios del Centro Democrático también se opusieron a la segunda versión de esos acuerdos firmada en Bogotá a fines de noviembre entre el Jefe de las FARC, Rodrigo Londoño (alias Timochenko) y el presidente colombiano, Juan Manuel Santos.

Pero mucho antes de que eso ocurriera, Donald Trump, como es su costumbre, comenzó a modificar las declaraciones anuentes que previamente había realizado acerca de las políticas hacia Cuba desarrolladas por la administración de Barack Obama después del 17 Diciembre del 2014. En efecto, buscando captar el apoyo de los electores opuestos a las órdenes ejecutivas y a la Directiva Presidencial de Barack Obama del 14 de octubre de 2016, el entonces candidato presidencial republicano comenzó a resaltar sus desacuerdos con esas políticas y, en la misma medida que los fue acentuando, fue asumiendo el lenguaje ultraconservador en el que está redactada la PPR. Al respecto, en esta se indicó:

Queremos darle la bienvenida al pueblo de Cuba en nuestra familia hemisférica, después que sus corruptos gobernantes sean sacados del poder y rindan cuentas por sus crímenes contra la humanidad. Estamos con las Damas de Blanco y con todas las víctimas del asqueroso régimen que está aferrado al poder en La Habana. Nosotros decimos claramente: ellas han sido traicionadas por aquellos que actualmente controlan la política exterior estadounidense. La "apertura hacia Cuba" de la actual administración fue un vergonzoso acomodo a las demandas de los tiranos. Solo fortalecerán a esa dictadura militar. Llamamos al Congreso a defender las leyes estadounidenses que plantean las condiciones para eliminar las sanciones contra la isla: la legalización de los partidos políticos, prensa independiente y elecciones libres con supervisión internacional. Reclamamos una plataforma [aérea] para las transmisiones de Radio y TV Martí y la promoción de acceso a Internet como herramienta tecnológica para fortalecer el movimiento pro-democracia en Cuba. Nosotros apoyamos el trabajo de la Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre [institucionalizada por la administración de George W. Bush y disuelta por la de Barack Obama] y afirmamos los principios de la Ley de Ajuste Cubano de 1966, reconociendo el derecho de los cubanos a escaparse del comunismo" (PPR, 2016: 50).

Es imprescindible resaltar que ese ofensivo y rancio lenguaje fue el empleado por Donald Trump en el exabrupto que difundió inmediatamente después que conoció la desaparición física del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro. El irrespetuoso contenido de ese mensaje llevó al historiador cubano, Elier Ramírez Cañedo, a preguntarse si, al menos en lo correspondiente a Cuba, el próximo mandatario republicano había decidido sustituir las herramientas del "poder inteligente" (*smart power*) empleadas por Barack Obama, por las del "poder estúpido" (*stupid power*) previamente empleadas por otros mandatarios demócratas y republicanos estadounidenses. Acto seguido agregó:

Si Obama se propuso con inteligencia captar simpatías en el pueblo cubano, ya Trump se ganó para siempre la animadversión de la gran mayoría del pueblo cubano con sus declaraciones sobre Fidel. Trump debió estar mejor asesorado y haber sabido que este pueblo es profundamente fidelista y que meterse con Fidel es como meterse con quien es considerado el padre de millones de cubanos, una de las raíces más sensibles de nuestra espiritualidad, del

orgullo y la dignidad que significa ser cubano. El pueblo de Cuba no olvida jamás esas ofensas, sobre todo si vienen en horas de dolor y tristeza. Ojalá el recién electo presidente de los Estados Unidos rectificara su conducta, pero de cualquier manera ya ha sembrado un precedente nefasto (Ramírez, 2016).

El escenario más probable de las políticas hacia América Latina que desplegará la administración de Donald Trump

Cualesquiera que sean las consideraciones que merezcan esas y otras opiniones expresadas por el autor de esa cita, todo lo dicho en el acápite anterior dejan planteadas varias interrogantes que trascienden con mucho, aunque en mi opinión incluyen, las políticas hacia Cuba que emprenderá el actual gobierno temporal estadounidense. En lo que tiene que ver con los contenidos de este ensayo, ¿abandonará esa administración todas o solo algunas de las ingeniosas combinaciones entre las herramientas de los llamados *hard* y *soft powers* (*smart power*) empleadas por la administración de Barack Obama con vistas a cumplir todos los objetivos estratégicos, generales o específicos planteados o no en el primer acápite de este ensayo? ¿Esas herramientas serán sustituidas por las propias del que Elier Ramírez denomina *stupid power*?

En mi consideración esas preguntas no tienen una respuesta general. Por consiguiente, considero que para realizar anticipaciones acerca las estrategias y las herramientas que empleará en sus interrelaciones con América Latina y el Caribe la administración de Donald Trump resulta imprescindible realizar un análisis *caso a caso* que, además de los antecedentes ideológicos, políticos o militares de los altos funcionarios que ya ha nombrado o que nombrará en las próximas semanas, tome en cuenta las percepciones que tienen los diferentes grupos de poder y los poderes fácticos de ese país (incluida su poderosa maquinaria burocrático-militar) sobre los resultados favorables o desfavorables para su poder y sus intereses, así como para la seguridad imperial de los Estados Unidos que tuvieron las estrategias hacia el hemisferio occidental emprendidas por la administración precedente.

Ya indiqué que en este escrito no tengo espacio para presentar mis consideraciones sobre sus desiguales resultados. Sin embargo, para cumplir los propósitos que plantee en su introducción, creo imprescindible señalar que, en mi apreciación, el actual gobierno temporal mantendrá la mayor parte de las estratagemas desplegadas y las herramientas utilizadas por la maquinaria de la política exterior, económica, ideológica, de defensa y seguridad de los Estados Unidos durante el gobierno temporal de Barack Obama para garantizar la subordinación de los actuales gobiernos de Canadá y de México a las necesidades geopolíticas y geoeconómicas de los Estados Unidos; incluidas las definidas en la otrora llamada Alianza para la Prosperidad y la Seguridad de América del Norte (ASPAN) impulsada por la administración de George W. Bush, en consuno con el gobierno neoconservador del Primer Ministro canadiense Stephen Harper (2006-2015) y del derechista presidente mexicano Felipe Calderón (2005-2011).

Aunque en los años posteriores se presentaron ciertas contradicciones entre Harper, Obama y el actual presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, en la más reciente Cumbre de América del Norte efectuada en Ottawa en junio de 2016, esos dos últimos mandatarios, junto al entonces recién electo primer ministro liberal canadiense, Justin Trudeau, adoptaron diferentes acuerdos para continuar profundizando "la integración de América del Norte" (Vascós, 2016). Como ya se indicó, la continuación de esa integración con normas ambientales menos exigentes que las actualmente vigentes, estuvo incluida en la PPR.

Por consiguiente, con independencia de si acelera la ampliación del muro que existe en la frontera entre ambos países, así como del desenlace de la renegociación del TLCAN que se desarrolle con los actuales gobierno de Canadá y de México anunciada por Donald Trump como parte de las prioridades de sus "primeros cien días en la presidencia", no se abandonará ese propósito largamente perseguido por los representantes políticos, militares e ideológico culturales de diferentes sectores de las clases dominantes estadounidenses; incluidos los dueños y gerentes de las principales corporaciones transnacionales (entre ellas, las dedicadas a la producción de automóviles que se "exportan" al mercado estadounidense) que ya tienen

incluidos sus enclaves en México entre los eslabones de sus correspondientes "cadenas de valor" y como una de sus principales fuentes de sus ganancias.

Algo parecido puede decirse de las estrategias desplegadas por Barack Obama para fortalecer su multifacética dominación sobre todos los Estados-nacionales ubicados en el istmo centroamericano, al igual que en el Caribe insular y continental. Entre ellas, todas las acciones desplegadas por el Departamento de Estado, por el NORTHCOM y por el Departamento de Seguridad Interna (HSD, por sus siglas en inglés) dirigidas a "bajar" la frontera de seguridad imperial de los Estados Unidos hasta el norte de Guatemala y de Belice. Igualmente, las acciones emprendidas por esas y otras estructuras del poder ejecutivo y del SOUTHCOM para contener y tratar de derrotar las "amenazas no tradicionales a su seguridad nacional" en los correspondientes territorios y en las aguas jurisdiccionales de los Estados del Triángulo Norte de Centroamérica, al igual que de Costa Rica, Panamá, de República Dominicana y de los 14 Estados integrantes de la Comunidad del Caribe (CARICOM).

Lo antes dicho junto a los persistentes afanes del SOUTHCOM, de la IV Flota de la Marina de Guerra y de los guardacostas estadounidenses de controlar los espacios marítimos y las rutas aéreas del Mar Caribe y del Golfo de México seguirá teniendo múltiples implicaciones negativas para los actuales gobiernos de Costa Rica, El Salvador y Nicaragua, encabezados por Guillermo Solís, Salvador Sánchez Cerén y Daniel Ortega, respectivamente; ya que en esos tres países, además de continuar las estrategias indicadas en el párrafo anterior, la administración de Donald Trump y las fuerzas más conservadoras de los partidos demócrata y republicano –el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI, por su acrónimo en inglés), e Instituto Internacional Republicano (IRI) ampliarán el apoyo que directamente o a través de la bipartidista Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) ya le han venido ofreciendo a las fuerzas sociales y políticas de la derecha costarricense, salvadoreña y nicaragüense.

Por tanto, es de esperar que la administración de Donald Trump fortalezca los condicionamientos que ya se le han venido imponiendo al gobierno salvadoreño para recibir los fondos que le corresponden de los 750 millones de dólares aprobados en el presupuesto del 2016-2017 por el Congreso de los Estados Unidos para apoyar el Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica (asesorado y monitoreado por el BID), así como de los más de 300 millones de dólares dirigidos a fortalecer en el propio año fiscal la implementación de la Iniciativa para la Seguridad de América Central (CARSI, por sus siglas en inglés) impulsada desde el 2010 por el gobierno temporal de Barack Obama.

También es de esperar que la recién inaugurada administración de Donald Trump le entregue al actual gobierno de Costa Rica los 30 millones de dólares en ayuda militar que en agosto del 2016 Obama le ofreció a su homólogo costarricense a cambio de su "cooperación" para contener las migraciones incontroladas y el tráfico de drogas y otros delitos conexos que se siguen produciendo en Centroamérica, así como para continuar edificando las instalaciones del cada vez más militarizado Servicio Nacional de Guardacostas costarricense que el SOUTHCOM está equipado con vistas a habilitar nuevas facilidades para el desplazamiento de sus fuerzas navales en las costas de ese país del Océano Pacífico y del Mar Caribe.

Asimismo, el nuevo mandatario estadounidense refrendará, tan pronto la apruebe el Congreso (controlado por el Partido Republicano), la llamada *Nicaragua Act* que se presentó en ambas cámaras en los meses previos y posteriores a la reelección de Daniel Ortega. Para los senadores y representantes promotores de las sanciones incluidas en esa Ley, los comicios presidenciales que se realizaron en noviembre de 2016 en Nicaragua (en los que resultó reelecto por más del 70% de los votantes su presidente Daniel Ortega) fueron fraudulentos. Entre otras razones, porque no fueron supervisados por la OEA. Para tratar de evitar esas sanciones, el gobierno nicaragüense aceptó que ese organismo supervise las próximas elecciones municipales que se efectuarán en el presente año.

Por otra parte, a pesar del rechazo de la actual administración republicana al TPP, se mantendrá su apoyo político-diplomático a la ALPA y a todos los acuerdos en el campo político, económico,

militar y vinculados a la "seguridad hemisférica" previamente firmados por el gobierno de Barack Obama con sus contrapartes de Colombia, Perú y Chile; incluido su multimillonario apoyo al denominado Colombia Peace Plan impulsado por esa administración demócrata (con el respaldo del Congreso y del Pentágono) para "ayudar" al actual y al gobierno colombiano que resulte electo en el 2018 a "ganar la paz", tanto como los ayudaron a "ganar la guerra" diferentes administraciones demócratas y republicanas estadounidenses (Isacson, 2016).

Paralelamente, la administración de Donald Trump continuará las diversas acciones públicas, discretas, encubiertas o secretas que había venido desplegando el gobierno temporal de Barack Obama con vistas a debilitar a la Revolución Ciudadana y a favorecer la victoria de las fuerzas de la derecha y de la centro-derecha ecuatoriana en los comicios presidenciales y parlamentarios que se efectuarán en febrero del 2017. Por tanto, cualesquiera que sean los resultados de esos comicios, se fortalecerán las relaciones de los partidos Demócrata y Republicano y de otras instituciones integrantes o vinculadas con la NED (como el Centro Internacional para la Empresa Privada, y el Centro Estadounidense para la Solidaridad Sindical Internacional, CIPE y ACILS, por sus correspondientes siglas en inglés) con todos los sectores de la derecha ecuatoriana, al igual que con la políticamente fortalecida derecha chilena.

Contando con ese apoyo y con los resultados favorables a sus candidatos en las elecciones municipales que se efectuaron en el 2016, los partidos que la integran redoblarán sus esfuerzos para derrotar al candidato presidencial que presentará la heterogénea coalición ahora denominada Concertación por la Democracia-Nueva Mayoría (en la que participa el Partido Comunista Chileno) en los comicios presidenciales que se efectuarán a fines del presente año. Ese empeño se verá favorecido por las grandes debilidades que ya exhibe el gobierno de esa coalición política, presidido por Michelle Bachelet.

Asimismo, el gobierno temporal de Donald Trump fortalecerá el ostensible respaldo político que le ha venido dando su antecesor demócrata a los gobiernos derechistas y "neoliberales" actualmente instalados en Argentina, Brasil y Paraguay. Y, al igual que ya venía haciendo la administración de Barack Obama, continuará sus acciones dirigidas a debilitar y si le fuera posible derrocar al gobierno boliviano presidido por Evo Morales, artífice de la Revolución Democrática y Cultural que se ha venido desarrollando en ese país desde el 2016. También a debilitar aún más a los sectores "populistas radicales" y "anti estadounidenses" que todavía conservan ciertas influencias en la elaboración de las ambivalentes políticas internas y externas que ha venido desarrollando el gobierno uruguayo presidido por Tabaré Vazquez. Tales acciones se complementarán con un mayor respaldo por parte de los partidos Demócrata y Republicano a los partidos Blanco y Colorado con vistas a lograr la derrota del candidato que presente el Frente Amplio-Encuentro Progresista en las elecciones presidenciales del 2018. Asimismo, al que seleccione la derecha brasileña para competir con el candidato que finalmente presente la debilitada izquierda de ese país en los comicios de igual carácter que se efectuarán el mismo año.

Como ya venía ocurriendo durante el último año de la administración de Barack Obama, en lo inmediato todas esas acciones tendrán por objetivos la profundización de la crisis que está sufriendo el MERCOSUR y, por carácter transitivo, el debilitamiento de la UNASUR y de la CELAC, así como de la influencia que han tenido y tienen en el funcionamiento de esa última organización de concertación política los gobiernos de los Estados suramericanos y caribeños integrantes del ALBA-TCP. Por consiguiente, la administración de Donald Trump redoblará las acciones que ya venía desplegando diversas instancias de la administración de Barack Obama (con el apoyo del Congreso) para lograr "el cerco y la asfixia", así como "la implosión" de Venezuela previstas en la diferentes fases de las Venezuela Freedom 1 y 2 Operations que, como se indicó, desde hace dos años, ha venido organizando el SOUTHCOM al amparo de la Orden Ejecutiva de Barack de Obama del 2015, ratificada en marzo de 2016 y en enero del 2017, con el pretexto de darle tiempo a la administración de Trump a que elaboré sus propias directivas al respecto.

Con tal fin esta última administración discontinuará los canales de dialogo entre altos funcionarios del Departamento de Estado y del actual gobierno venezolano que se habían

habilitado desde la única reunión que sostuvieron los presidentes de ambos países durante la VII Cumbre de las Américas efectuada en Panamá en abril del 2015. De manera convergente, la actual administración republicana estimulará a las fuerzas más reaccionarias de la mal llamada Mesa de Unidad Democrática (MUD) a abandonar definitivamente las complicadas negociaciones que bajo los auspicios de la UNASUR y del Vaticano, se venían desplegando con el que la PPR denominó "dictador marxista" que ha permitido que Venezuela "se haya convertido en un estado narco-terrorista", en "una avanzada iraní en América Central" y en "un cielo seguro para los agentes de Hezbollah" (PPR, 2016: 50).

Hay que resaltar que esos últimos elementos habían sido incluidos entre los "complejos desafíos no tradicionales a la seguridad nacional estadounidense" listados por el actual Jefe del SOUTHCOM, almirante Kurt Tidd, en la intervención que realizó el 10 de marzo del 2016 ante el Comité de Servicios Armados del senado estadounidense. Entre esos desafíos incluyó la existencia "de redes criminales transnacionales bien organizadas, bien financiadas, bien armadas y tecnológicamente avanzadas"; las migraciones de "extranjeros de interés especial" entre los que pudieran incluirse "luchadores terroristas extranjeros" vinculados al Estado Islámico e interesados en emprender actos terroristas en los Estados Unidos o en sus "naciones aliadas" (Tidd, 2016). Igualmente, "las intenciones del actual gobierno iraní de incrementar sus vínculos económicos, científicos y culturales con América Latina; la existencia de una extensa red de militantes y simpatizantes de la organización libanesa Hezbollah, algunos de los cuales están involucrados en el lavado de dinero y en otras actividades ilícitas", así como en el mantenimiento de "una infraestructura capacitada para emprender o apoyar actos terroristas" (Ibídem).

En esa ocasión Tidd también expresó su preocupación por los vínculos económicos, políticos y militares de Rusia con varios gobiernos latinoamericanos, así como por las diversas acciones en el terreno económico, político y cultural que –"violando las reglas establecidas" ha venido desarrollando el gobierno de la República Popular China en diversos países latinoamericanos y caribeños. De modo que esos enunciados seguramente encontrarán continuidad en las que algunos analistas estadounidenses han calificado como "escasamente realistas" políticas hacia esa potencia asiática emprendidas por Donald Trump.

En cualquier caso y acorde con esos conceptos, es de esperar que durante su gobierno la maquinaria de la política exterior, de defensa y seguridad de los Estados Unidos continúe respaldando financiera y militarmente todas las acciones previstas en la Iniciativa para la Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI, por su sigla en inglés) previamente impulsada por la administración de Barack Obama. Al par, los partidos Demócrata y Republicano y las otras instituciones integrantes de la NED redoblarán sus acciones dirigidas a apoyar a las fuerzas de la derecha que actúan en todos los Estados del Caribe insular y continental integrantes del ALBA-TCP, al igual que en los Estados de la CARICOM y del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) signatarios de los acuerdos de PETROCARIBE.

Con esas y otras acciones –como el condicionamiento de los fondos que aprobó el Congreso estadounidense para el impulso de la Iniciativa para la Seguridad Energética de Centroamericana y el Caribe impulsada desde fines del 20145 por la administración de Barack Obama y en particular por su vicepresidente Joe Biden se buscará debilitar la oposición que hasta ahora han expresado los gobiernos de los Estados integrantes de la CARICOM y del SICA a las propuestas de aplicarle a Venezuela las sanciones previstas en la Carta Democrática de la OEA impulsadas por su actual Secretario General, Luis Almagro; comprometido con el Departamento de Estado a impulsar "la reforma" de la OEA coincidente con los objetivos de la ya mencionada Ley al respecto firmada a fines del 2013 por el presidente Barack Obama y con los propósitos político-militares de esa organización impulsadas por el Pentágono. Asimismo, con algunas tareas de la ya mencionada Venezuela Freedom 2 Operation que ha venido desplegando el SOUTHCOM.

Sin dudas, en caso de que resulten exitosas las principales acciones hacia el sur del continente americano que –según mis anticipaciones desplegará la actual administración republicana, en el futuro previsible se le creará un contexto hemisférico complicado al actual gobierno cubano, presidido por Raúl Castro, así como al nuevo presidente de los Consejos de Estado y de Ministros

de ese país que resulte electo por los diputados a la Asamblea Nacional de Poder Popular previamente elegidos en los comicios que se realizarán en enero del 2018.

Por consiguiente, el escenario más probable de las políticas hacia Cuba que desarrollará el presidente republicano Donald Trump será el abandono de los llamados que reiteradamente Obama le ha realizado al Congreso a que levante "el embargo" contra Cuba. Adicionalmente, se ralentizaran (sin abandonarlos totalmente) buena parte de los demás componentes de la "nueva política" hacia ese archipiélago definida por Barack Obama en su ya mencionada Directiva del 14 de octubre del 2016; particularmente aquellos vinculados a los legítimos y multidimensionales intereses de la seguridad nacional de los Estados Unidos: la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y otros conexos, así como las migraciones incontroladas y el tráfico de personas.

Lo antes dicho no evitará que la actual administración republicana fortalezca las acciones dirigidas a "cambiar el régimen cubano" con la consiguiente complicación en la ejecución de algunos de los 20 acuerdos que finalmente se lograron concluir entre los funcionarios de alto nivel de la administración demócrata y del gobierno cubano antes del 19 de enero del 2017. Asimismo, el condicionamiento a cambios en las políticas internas y externas cubanas de cualquier negociación que se desarrolle entre ambos gobiernos en el futuro previsible. Por ende, en estas no imperarán el espíritu de reciprocidad y de respeto a la soberanía y la autodeterminación del pueblo cubano reiteradamente aceptadas, desde diciembre del 2014, por Barack Obama y por los Secretarios y funcionarios de diferentes secretarías y del Consejo Nacional de Seguridad estadounidense (en especial, Benjamin Rhodes) que han participado en las intensas y, por lo general, fructíferas negociaciones que desde esa fecha se han desarrollado con sus correspondientes contrapartes del gobierno cubano.

Además de los enunciados de la PPR y de los exabruptos de Trump en ocasión de la desaparición física de Fidel Castro ya mencionados en el acápite anterior, así parece confirmarlo la incorporación a su "equipo de transición" de varios cubano-estadounidenses extremadamente críticos a "la nueva política" hacia Cuba desplegada por la administración de Barack Obama. Igualmente, los planteamientos realizados por el Secretario de Estado del gobierno de Donald Trump, el ex gerente general de la poderosa empresa petrolera EXXON-Mobil Oil, Rex Tillerson, en la prolongada audiencia (duró nueve horas) orientada a obtener su ratificación que sostuvo el pasado 18 de enero con los 20 integrantes demócratas y republicanos del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

Ante los tendenciosos comentarios y las incisivas preguntas vinculadas a sus posiciones acerca del futuro de las relaciones oficiales con Cuba que le formularon el Senador Demócrata Bob Menéndez y el Senador Republicano Marcos Rubio (ambos radicalmente opuestos a las políticas hacia ese país desarrolladas por el ahora ex presidente Barack Obama), Tillerson afirmó, entre otras cosas que veremos en el próximo párrafo, que en caso de ser aprobado como Secretario de Estado él "le recomendaría" al presidente Trump que vetara cualquier decisión del Congreso estadounidense orientada a eliminar "el embargo" contra Cuba.

Reiterando con sus propias palabras lo previamente planteando por el actual mandatario estadounidense, así como por otros adversarios de la política de Obama hacia la mayor de las Antillas, Tillerson también indicó que, en su opinión, "[n]uestros recientes compromisos con el gobierno de Cuba no han sido acompañados por ninguna concesión significativa de su parte en el campo de los derechos humanos. No hemos logrado que [ese gobierno] sea considerado responsable por sus conductas. Sus líderes recibieron mucho, mientras que su pueblo recibió poco. Eso no sirve ni a los intereses de los cubanos, ni de los estadounidenses" (Tillerson en Yepe, 2017).

Acto seguido señaló de manera reiterada que creía que el presidente Donald Trump había sido "bastante claro" en indicar que le iba a pedir a todas las agencias del gobierno estadounidense que realizaran una revisión completa de todas las órdenes ejecutivas del presidente Barack Obama; incluidas las vinculadas a las autorizaciones de las 12 categorías de viajes que los ciudadanos estadounidenses ya pueden realizar a Cuba sin autorización de la OFAC y las "diversas actividades de negocios" que se pueden realizar en ese país. A decir de Tillerson, esa

revisión también incluirá “las razones que llevaron al Departamento de Estado y a diversas agencias del gobierno estadounidense a excluir a Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo” (Ibídem). Merece recordar que esa exclusión fue una de las condiciones imprescindibles que en la primera reunión bilateral que sostuvieron en Panamá en abril del 2015 le planteó a Obama su homólogo cubano Raúl Castro para restablecer las relaciones diplomáticas de Cuba con los Estados Unidos.

Adicionalmente, creo conveniente resaltar que según la información que he podido revisar— los asuntos vinculados al porvenir de las relaciones con Cuba fueron uno de los pocos temas vinculados a las políticas de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe que ocuparon los diferentes y no siempre coincidentes comentarios y preguntas que le realizaron a Tillerson los integrantes del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Si mi información fuera completa, se ratificaría el criterio previamente expresado en este ensayo acerca de la existencia de un consenso bipartidista favorable a buena parte de los objetivos generales y específicos, así como a las principales estrategias empleadas por la administración de Barack Obama para tratar de “renovar” y “prolongar a lo largo del siglo XXI el liderazgo estadounidense en las Américas”.

Seguramente, como ha ocurrido en otras ocasiones históricas, las discrepancias que se presentarán en el futuro previsible tanto en el seno de los diversos órganos del poder ejecutivo, como del poder legislativo y de los cada vez más monopolizados medios privados de desinformación masiva estadounidenses estarán vinculadas a las diferentes percepciones existentes acerca de la eficacia de los conceptos e instrumentos empleados por la administración de Barack Obama para garantizar la seguridad imperial de los Estados Unidos y, estrechamente vinculados a ella, los importantes intereses geopolíticos y geoeconómicos de sus clases y sus grupos dominante en el que la ex asesora para la Seguridad Nacional del ex presidente Barack Obama, Susan Rice, denominó “crucial hemisferio [occidental]” (Rice en Yepe, 2017).

A modo de conclusión

Todo lo antes dicho y otros elementos excluidos en beneficio de la síntesis me llevan a concluir que el escenario más probable de las políticas hacia América Latina y el Caribe (incluida Cuba) que desarrollará el recién inaugurado gobierno temporal estadounidense presidido por Donald Trump tendrá muchos componentes de continuidad con relación a los objetivos generales y específicos, así como a las estrategias desplegadas por su antecesor demócrata. Pero la nueva administración republicana le dará un mayor despliegue a las herramientas del llamado *hard power* (incluidas las negociaciones desde posiciones de fuerza, incluso con algunos de sus “socios” y “aliados”, cual es el caso del actual gobierno de México) que las que tuvieron en el gobierno temporal precedente.

Así parece indicarlo los diversos multimillonarios y ex militares de alto rango que el actual mandatario ha seleccionado para conformar buena parte de su gabinete. No tengo espacio para mencionarlos y caracterizarlos a todos. Pero me parece importante resaltar los seleccionados para conducir la política exterior, de defensa y seguridad de los Estados Unidos, al menos durante el período que abarca mis anticipaciones. Como ya se indicó la Secretaría del Departamento Estado le fue encargada a un ex alto ejecutivo de la EXXOM-Mobil Oil Company, empresa petrolera que tuvo varios conflictos con los sucesivos gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela. Entre ellos, los causados por sus exploraciones en la zona económica marítima que aún está en litigio entre ese país y la República Cooperativa de Guyana.

A su vez, como Consejero de Seguridad Nacional, Trump designó al “islamofóbico” y pro-sionista teniente general retirado Michael Flynn. Si finalmente el Senado le concede la licencia necesaria, la secretaria del Departamento de Defensa será ocupada por el general retirado James Mattis; quien luego de su participación destacada en las sangrientas Guerras del Golfo (1991), de Afganistán (2001) y de Irak (a partir del 2003) fue separado de las Fuerzas Armadas estadounidenses por oponerse a los cambios que había introducido la administración de Barack Obama en su proyección político-militar hacia el Medio Oriente y el Golfo arábigo-pérsico.

Por otra parte, la Secretaría del HSD (también si el senado lo autoriza) será asumida por el ex jefe del SOUTHCOM (2011-2015), el almirante retirado John Kelly; quien, entre otras acciones desplegadas contra los pueblos y las naciones de Nuestra América, fue uno de los coordinadores de toda la ayuda militar que le ofreció Estados Unidos a las represivas fuerzas militares colombianas durante los últimos años de la primera y los primeros de la segunda administración de Barack Obama. Asimismo, uno de los instigadores de la ya referida directiva de Barack Obama que calificó a Venezuela como una "amenaza inusual e extraordinaria para la política exterior y a la seguridad nacional de los Estados Unidos", así como el organizador de la también mencionada Venezuela Freedom 1 Operation iniciada en el 2015.

Adicionalmente, la jefatura de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) le fue encomendada al ex militar y ex integrante del Comité de Inteligencia del Congreso Mike Pompeo, miembro destacado del ultraconservador Tea Party y, por tanto, hostil al incumplido propósito de Barack Obama de cerrar la prisión enclavada en la mal llamada Base Naval de Guantánamo y partidario de derogar los acuerdos establecidos entre los gobiernos de Estados Unidos e Irán, en el 2015.

No obstante, como indiqué en la introducción de este ensayo, el escenario reseñado al comienzo de estas conclusiones no es el único posible. Por consiguiente, podrían configurarse otros escenarios alternos a partir de las acciones reactivas, pre-activas y proactivas que emprenderán los diversos actores sociales y políticos, estatales y no estatales, canadienses, estadounidenses, latinoamericanos y caribeños que han recibido con una enorme preocupación la elección de Donald Trump, así como rechazado sus posiciones racistas, xenofóbicas, misóginas, homofóbicas, reacias a cumplir los acuerdos adoptados en la Cumbre de París para contener el cambio climático, al igual que los adelantos que ese mandatario ha realizado sobre algunos de los componentes de las políticas internas y externas que desarrollará durante su administración.

Sin embargo, en mi consideración, todos esos actores sociales, políticos e intelectuales, gubernamentales o no gubernamentales, deben prepararse para enfrentar "los peores escenarios" y, por tanto, para contrarrestar –mediante acciones proactivas y, en lo posible, concertadas las redobladas amenazas que ese gobierno temporal estadounidense les planteará a los pueblos, las naciones y a algunos de los gobiernos de Nuestra América. En ese contexto recobra toda su vigencia y nuevos significados lo planteado en 1891 por José Martí:

Ya no podemos ser el pueblo de hojas, que vive en el aire, con la copa cargada de flor, restallando o zumbado, según lo acaricie el capricho de la luz, o lo tunden y talen las tempestades; ilos árboles se han de poner en fila para que no pase el gigante de las siete leguas! Es la hora del recuento, y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado como la plata en las raíces de los Andes (Martí [1891] 1974: 22).

La Habana, 20 de enero de 2017

BIBLIOGRAFÍA

Aportes 2014 La reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Washington, *Aportes DPLF*, Número 19, Año 7, abril.

Baker, Dean 2017 "[Donald Trump and His Cabinet of Criminals](#)", *Truthout*, January 9.

Congress of the United States of America 2013: *Organization of American States Revitalization and Reform Act of 2013*.

Boron Atilio 2012 *América Latina en la geopolítica del imperialismo*, Editorial Luxemburg, Argentina.

Gortney, William 2016 *Statement of Admiral William E. Gortney, United States Navy Commander, United States Northern Command and North American Aerospace Defense Command before The Senate Armed Services Committee*, Washington, March 10.

Higueta, Oto 2016 "Plan Colombia: un balance a 15 años de su implementación", en, www.facebook.com/America.Latina.en.Movimiento, consultado el 25 de febrero.

Isacson [Adam](#) 2016 "Peace Colombia": What's New About It?", WOLA, Estados Unidos, 15 de Febrero.

JID 2014 El sistema interamericano de Defensa, Secretaría Junta Interamericana de Defensa, Washington.

Kinosian, Sarah, John Lindsay-Poland y Lisa Haugaard 2015 "Estados Unidos no debería exportar el 'éxito' de la guerra de Colombia contra las drogas", en <http://es.insightcrime.org/analisis/estados-unidos-no-deberia-exportar-exito-guerra-colombia-contra-drogas>, consultado el 12 de julio 2015

Martí, José ([1891], 1974) "Nuestra América", en José Martí: *Nuestra América*, Casa de las Américas, La Habana.

Mojica, Francisco José 2000 "Determinismo y construcción del futuro", en López Segrera, Francisco y Filmus, Daniel (coord.) *América Latina 2020: Escenarios, alternativas, estrategias*, FLACSO-Temas Grupo Editorial, Buenos Aires, 2000, pp. 111-125.

Obama, Barack 2008 *Renewing U.S. Leadership in the Americas*, Obama for America, Washington.

Obama, Barack 2016: Directiva Presidencial De Políticas – Normalización Estados Unidos-Cuba (Directiva Presidencial De Políticas/Ppd-43), The White House, Washington, October 14.

Panetta, Leon 2012 *La política de defensa para el Hemisferio Occidental*, . Department of Defense United States of America, Washington.

PPR 2016: Plataforma del Partido Republicano, aprobada en la Convención de Cleveland, 19 julio.

Ramírez Cañedo, Elier 2016 "Donald Trump y Cuba: ¿Del *smart power* al *stupid power*?", en *Boletín Por Cuba* (Año 14 Número 96), La Habana, 6 de diciembre

Robinson, William 2006 "Trumpism, 21st Century Fascism, and the Dictatorship of the Transnational Capitalist Class" en <https://www.facebook.com/WilliamIRobinsonSociologist/>, 4 de diciembre.

Suárez Salazar, Luis 2003 *Madre América: Un siglo de violencia y dolor (1898-1998)*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana.

Suárez Salazar, Luis 2006 *Un siglo de terror en América Latina*, Ocean Sur (un proyecto de Ocean Press, Melbourne, Nueva York y La Habana.

Suárez Salazar, Luis 2010 *Obama: La máscara del poder inteligente*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana.

Suárez Salazar Luis [2014] 2016 "La política hacia América Latina y el Caribe bajo la Presidencia de Barack Obama: una mirada desde la perspectiva crítica" en Darío Salinas (coordinador) *América Latina: nuevas relaciones hemisféricas e integración*, Universidad Iberoamericana A.C, Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, México

Suárez Salazar, Luis 2016 "Las políticas de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe: una mirada después de restablecimiento de sus relaciones diplomáticas con Cuba", ponencia presentada en el evento académico internacional "América Latina en disputa: Estado, gobierno y sociedades en el nuevo milenio", realizado en Bogotá, Colombia, entre el 2 y el 4 de noviembre de 2016 con el auspicio de la Maestría de Estudios Políticos latinoamericanos y del Departamento

de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia, así como de la Sociedad Latinoamericana de Economía y Pensamiento crítico (SEPLA).

Tickner, Arelene 2014 *Colombia, the United States, and Security Cooperation by Proxy*, Washington Office on Latin America, marzo.

Tidd, Kurt 2016 *Posture Statement of Admiral Kurt W. Tidd Commander, United States Southern Command before the Senate Armed Services Committee*, Washington, March 10.

Torres Alejandro 2016: "La Junta Fiscal", power point enviado al autor de este escrito el 11 de julio de ese año.

Vascós, Fidel 2016 "La Cumbre de América del Norte en Ottawa", ponencia presentada en la XIII Conferencia de Estudios Americanos "Realidades y perspectivas de los procesos progresistas y de Izquierda en Nuestra América", convocada por el Centro de Investigaciones de Política Internacional, La Habana, 19 al 21 de octubre.

Weisbrot Mark 2015 "Obama face another disastrous Summit due to sanctions against Venezuela, en *The Hill*, April, 9.

Yepe, Roberto (compilador) 2017 "Senate Foreign Relations Committee- Hearing", en *Selección informativa sobre la política exterior norteamericana*, Número 13, ISRI, La Habana, 18 de enero.

Nota: Este artículo actualiza y en algunos aspectos amplía la ponencia que, con el título "El resultado de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos: implicaciones para América Latina y el Caribe" presenté en el XV Taller Cuba en la Política Exterior de los Estados Unidos de América: "Tendencias y Perspectivas de las relaciones Cuba-Estados Unidos después de las elecciones de noviembre de 2016", convocado por el Centro de Investigaciones de la Política Internacional (CIPI) de La Habana, Cuba, entre el 14 y el 16 de diciembre de ese año.

- Luis Suárez Salazar es Licenciado en Ciencias Políticas, Doctor en Ciencias Sociológicas y Doctor en Ciencias. Escritor y ensayista integrante de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), así como Profesor Titular del Instituto Superior de Relaciones Internacionales "Raúl Roa García", al igual que de las cátedras Ernesto Che Guevara, Simón Bolívar y de Estudios sobre el Caribe "Norman Girvan" de la Universidad de La Habana. Actualmente integra los Grupos de Trabajo de Estudios sobre Estados Unidos y sobre el Caribe del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y el Consejo Consultivo de ex presidentes de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS).

[1] En la literatura marxista, siempre se han diferenciado los términos Estado y Gobierno. Desde el reconocimiento del carácter socio-clasista de cualquier Estado, el primero alude a lo que se denomina "la maquinaria burocrática-militar" y los diferentes aparatos ideológico-culturales que de manera permanente garantizan la reproducción del sistema de dominación. Mientras que el Gobierno alude a los representantes políticos de las clases dominantes o de sectores de ellas que se alternan en la conducción de la política interna y externa de ese Estado. Curiosamente, la diferenciación entre los "gobiernos permanentes y temporales" fue retomada por los redactores del famoso documento Santa Fe I. Con los primeros se referían a los que en ese texto llamaban "grupos de poder y poderes fácticos", mientras que los segundos aludían a los gobiernos surgidos de los diversos ciclos electorales u otros cambios no democráticos que se producen en diferentes países del mundo. De ahí la validez de emplear el término "gobierno temporal" para referirnos a las diferentes administraciones demócratas o republicanas que se han alternado en los Estados Unidos y a otros gobiernos del continente americano.

[2] Esos y otros calificativos (algunos de ellos, más fuertes) han sido empleados por diferentes autores para caracterizar los comportamientos de Donald Trump, antes y después de su elección como presidente de los Estados Unidos.

[3] Al respecto debe recordarse el nefasto papel que desempeñaron algunos jueces y tribunales estadounidenses en la defensa de los intereses de los llamado "fondos buitres" poseedores de títulos de la deuda argentina, así como en la denegación de las indemnizaciones reclamadas por Ecuador para compensar los desastres socio-ambientales provocados en algunas zonas y comunidades de ese país por la empresa petrolera Chevron.

[4] Como ha demostrado el historiador estadounidense Max Paul Friedman en su obra *Repensando el antiamericanismo: la historia de un concepto excepcional en las relaciones internacionales estadounidenses* (Antonio Machado Libros, Madrid, 2015), ese mito siempre ha estado presente en la narrativa de diversos gobiernos y de los intelectuales orgánicos a las clases dominantes estadounidenses orientadas a estigmatizar a aquellos gobiernos de otros países que defienden sus propios intereses nacionales o que expresan disensos con algunas de las políticas interna o externa impulsadas por uno u otro gobierno estadounidense. Siguiendo esa tradición, ese antojadizo calificativo fue empleado públicamente por la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, por el ex asesor del Consejo Nacional de Seguridad de la segunda administración de Barack Obama, Benjamin (Ben) Rhodes, e incluso, en algunas ocasiones, por el ese mandatario estadounidense.

TRUMP NO ESTÁ LOCO, NI ES "POPULISTA"

Por. OLMEDO BELUCHE

Trump no está loco, ni tampoco Hitler lo estaba. La pretensión de algunos liberales de analizar el proyecto del nuevo presidente norteamericano como una supuesta desviación psicológica del personaje es una falacia tan grande como la versión histórica que ha pretendido que los actos del dictador alemán fueron producto de su supuesta demencia.

Ese enfoque desvía el análisis de la realidad: ambos son producto de la crisis de la sociedad capitalista, y sus proyectos políticos consisten en sacar al sistema de la crisis derribando los derechos civiles y sociales de importantes segmentos de la sociedad.

Trump y Hitler, algo en común: la crisis del capitalismo

Hitler nació políticamente de la crisis del sistema capitalista que condujo a las dos Guerras Mundiales y el consecuente estancamiento económico de los años 20 y 30. Obtuvo el apoyo de importantes sectores descontentos de la sociedad, especialmente de las capas medias empobrecidas y trabajadores desempleados, quienes lo llevaron al poder con su voto. Cohesionó a la sociedad con represión y el discurso nacionalista de la "gran Alemania", atacando los derechos laborales de la clase obrera y culpando a comunistas, judíos, gitanos y eslavos de la crisis.

Donald Trump, y por extensión la extrema derecha europea y de otros países, son producto de la profunda crisis económica, social y política del capitalismo del siglo XXI y, al igual que Hitler, le han dado su apoyo electoral importantes sectores de capas medias y desempleados que sueñan con superar su empobrecimiento social y "hacer grande a América, de nuevo". Su ideología consiste en culpar de la crisis a inmigrantes latinoamericanos, a México en particular, a los musulmanes y a China.

Sus primeros decretos de gobierno demuestran que va en serio: inició la clausura del Obamacare, que da seguro médico a los más pobres; tuvo palabras hostiles hacia México ordenando la construcción del muro y anunciando que ese país lo pagará; cerró la entrada a musulmanes de 7 países; anuló el tratado de comercio transpacífico; alentó al criminal fascista Netanyahu a continuar la ocupación de Cisjordania anunciando el traslado de su embajada a Jerusalén; y ordenó un bombardeo en Yemen, con más de 50 muertos, niños incluidos.

Trump no es "populista" sino un ultraderechista con rasgos fascistas

Otra falacia de los liberales es atribuir a Trump el adjetivo de "populista", concepto que han deformado para hacerlo sinónimo de "demagogo", que aplican a cualquiera que critique al libre mercado capitalista y su acartonado y corrupto sistema político electoral.

De ahí los medios de comunicación hacen una amalgama en la que mezclan en un mismo saco posiciones tan distintas como el proyecto antiimperialista y antineoliberal de Hugo Chávez y otros líderes latinoamericanos, con propuestas antiobreras y racistas de extrema derecha, como la de Le Pen en Francia, por ejemplo, como si fueran los mismo.

Aunque en apariencia la izquierda y la extrema derecha critican las consecuencias de la crisis capitalista, sus propuestas y enfoques son completamente opuestos, pues la izquierda propone una ruptura con el sistema y su crisis mediante medidas de tipo socialista, o sea, de reparto social de la riqueza, mientras la derecha extrema defiende el capitalismo echando la culpa a las "minorías" y a la clase trabajadora.

Los liberales, socialdemócratas y los publicistas de la globalización neoliberal han inventado el concepto de "populismo" para etiquetar a todo el que critique al sistema político pseudo democrático, idealizado por ellos, pero cada vez más alejado de los derechos sociales de los pueblos y las clases trabajadoras, y cada vez más repudiado por inoperante y corrupto.

Trump no solo no es populista por su origen de clase, un empresario de la construcción con intereses capitalistas en medio mundo, sino porque su gobierno está constituido por representantes de la élite capitalista de Estados Unidos y militares de extrema derecha.

El gobierno de Trump es agente de Wall Street y del imperialismo yanqui.

Pese a las críticas que lanzó en campaña contra Hillary Clinton por ser agente de Wall Street, la Bolsa de Valores de Nueva York está feliz con su gobierno y sus primeras medidas: todo el apoyo a la industria automovilística y petrolera amenazando con derribar las regulaciones ambientales y otras. Incluyendo la desregulación de los bancos introducida por Obama luego de la crisis de 2008, que pretendía controlar un poco la especulación financiera.

La militante de la organización norteamericana Worker World – Mundo Obrero, Sara Flounders, ha catalogado a su gabinete como "el más rico de la historia": secretario del Tesoro, Steven Munchin, de Goldman Sachs; de Comercio, Wilbur Ross, de Rotschild Inc.; de Educación la multimillonaria Betty De Vos; de Trabajo, Andrew Puzder, de la empresas de comida rápida; fiscal general, el racista Jeff Sessions; y, la tapa del coco; Rex Tillerson como Secretario de Estado, CEO de Exxon Mobil.

Las medidas de Trump solo agudizan la crisis del capitalismo.

Igual que Hitler, Trump fracasará en resolver las causas de la crisis norteamericana, pues sus medidas no atacan a la lógica explotadora e irracional del sistema capitalista, sino que busca falsos chivos expiatorios. Trump, como Hitler, va aumentar el sufrimiento de millones de seres humanos, pero no habrá muro que contenga las luchas e insurrecciones populares que sus medidas provoquen.

Lo único que logrará será echarle más leña al fuego, agudizando las ya incontenibles contradicciones del sistema capitalista. Trump no puede desmontar la globalización neoliberal, como algunos creen, porque ésta es una política de los grandes monopolios capitalistas, empezando por los norteamericanos, a los cuales responde el propio presidente yanqui y sus negocios familiares.

Trump no puede ser consecuentemente proteccionista, porque cargar con aranceles a las importaciones chinas o mexicanas es afectar los negocios del gran capital norteamericano que ha creado este sistema interdependiente para abaratar sus costos de producción explotando mano de obra barata extrajera para producir mercancías para el mercado norteamericano. Sólo puede quitar regulaciones ambientales y de salud, así como rebajar impuestos a los grandes capitales, que es lo que está haciendo, agudizando otros problemas y aumentando la disparidad social.

Trump será derrotado por la movilización democrática y anticapitalista.

No olvidemos que el fascismo y su Segunda Guerra Mundial, con sus decenas de millones de muertos, fueron derrotados por una gran ola revolucionaria en el mundo que empezó en Stalingrado, que barrió al orden mundial imperante hasta entonces, de la que nacieron los grandes movimientos de liberación nacional de Asia, África y América Latina de mitad del siglo XX.

Al igual que el fascista alemán, Trump será derrotado por las movilizaciones de los sectores sociales que ataca y que ya han empezado a ganar la calle para defender sus derechos en Estados Unidos y en todo el mundo: mujeres, negros, latinos, indígenas, musulmanes, trabajadores, ambientalistas, LGTB, etc.

Federación Sindical Mundial
-Región América-

Consejo Editorial: Olga Lydia Miranda Hernández y la colaboración especial de Heriberto González del Valle.

Dirección: Ramón Cardona.

Estamos situados en: Calle 190 No.1306, entre 13 y 15, Reparto Siboney, Playa, La Habana, Cuba.

Teléfonos: (537) – 271-4345 ext - 102, 104, y 272-0739-ext-102. Fax: (537) 273-5921.

E-mails: Ramón Cardona: ramon@fsm.ctc.cu, Secretaria Ejecutiva: secretaria@fsm.ctc.cu

Exprésenos su opinión y sugerencias acerca de este trabajo: secretaria@fsm.ctc.cu

Puede acceder a través del sitio: www.fsmamerica.org